

2018

HUMANITARIAN NEEDS OVERVIEW

PEOPLE IN NEED

4.9M

NOV 2017



COLOMBIA

Este documento fue elaborado en nombre del Equipo Humanitario de País por OCHA, con el apoyo de la Unidad de Análisis y Manejo de Información de Colombia (UMAIC).

Este documento proporciona una visión y análisis conjunto de la crisis por parte del Equipo Humanitario de País, incluida la necesidad humanitaria más urgente y el número estimado de personas que necesitan asistencia. Representa una base de evidencia consolidada y ayuda a planificar conjuntamente la respuesta estratégica.

Las designaciones empleadas y la presentación de los datos contenidos en el informe no implican, de parte de la Secretaría de las Naciones Unidas, juicio alguno sobre la condición jurídica de ningún país, territorio, ciudad o región o de sus autoridades ni sobre la delimitación de sus fronteras o límites



www.unocha.org/colombia








www.www.humanitarianresponse.info/es/operations/

ochacolombia@un.org - contacto@umaic.org



[@ochacolombia](https://twitter.com/ochacolombia)

PARTE I: SUMARIO

- 
-  Necesidades Humanitarias y Cifras Claves
 -  Impacto de la Crisis
 -  Desagregación de Personas con Necesidades
 -  Priorización de la Necesidad



San Andres y Providencia

Mar Caribe

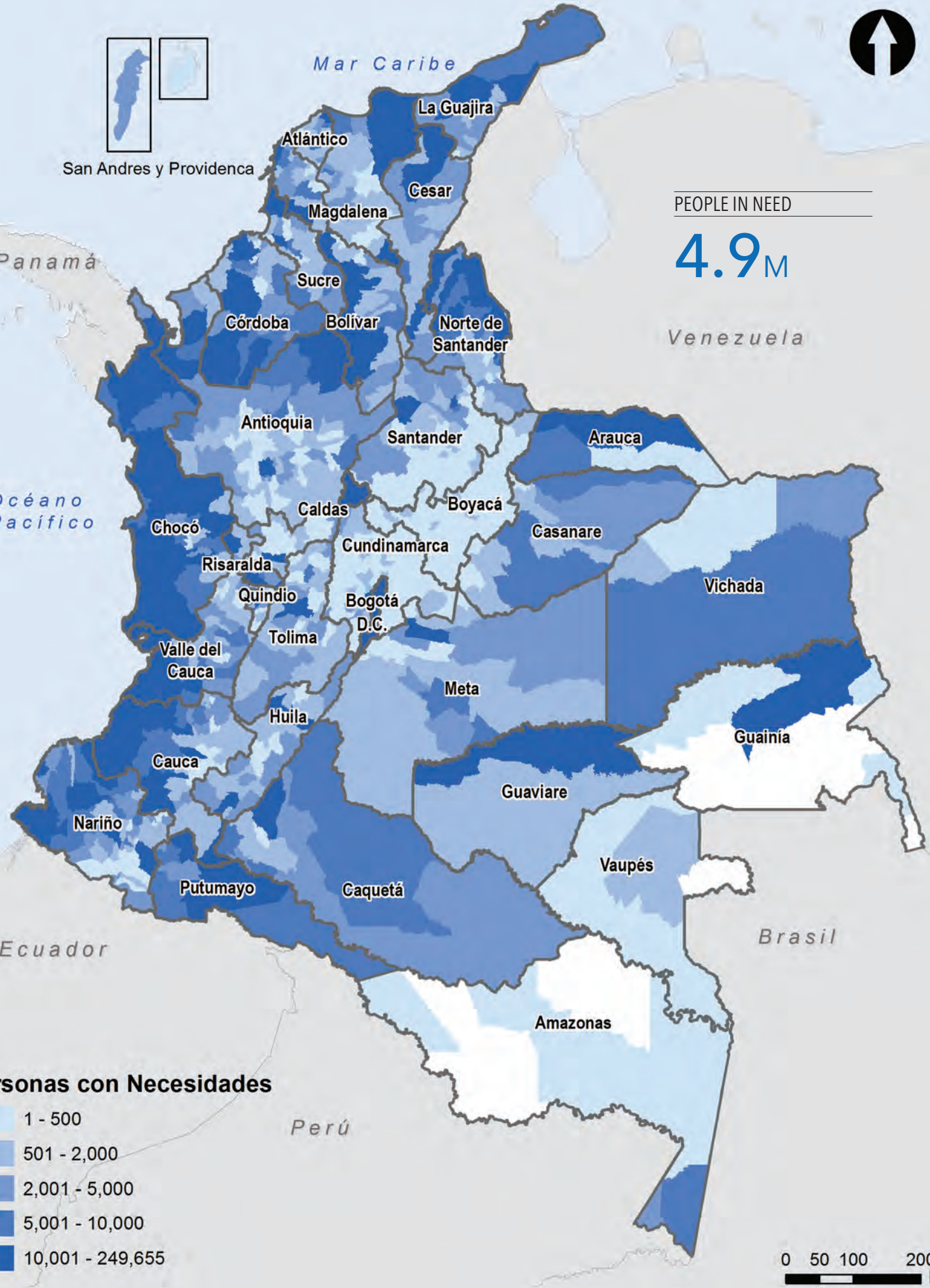
PEOPLE IN NEED

4.9M

Panamá

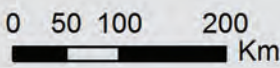
Venezuela

Océano Pacífico



Personas con Necesidades

- 1 - 500
- 501 - 2,000
- 2,001 - 5,000
- 5,001 - 10,000
- 10,001 - 249,655



NECESIDADES

HUMANITARIAS & CIFRAS CLAVE

La población víctima y los grupos poblacionales más vulnerables como los grupos étnicos, las mujeres, niñas, niños, adolescentes y jóvenes (NNAJ) que viven en zonas rurales de difícil acceso y zonas urbanas, han sido quienes han recibido el mayor impacto humanitario durante varias décadas, como consecuencias del conflicto armado y violencia generalizada en Colombia.

En el contexto actual, existen factores que agudizan y crean nuevas necesidades humanitarias sectoriales. El impacto humanitario se evidencia en el aumento de los desplazamientos masivos, eventos de limitaciones a la movilidad y restricciones al acceso humanitario, masacres, acciones bélicas y ataques contra la población civil, representados en 4.9 millones de personas con necesidades. Preocupa el accionar armado y expansión de los grupos armados no estatales¹ y los grupos armados posdesmovilización (GAPD)², sumado a la reconfiguración y nuevas dinámicas de violencia de nuevos grupos armados organizados en los territorios de donde salieron las FARC-EP³, posterior a la firma del acuerdo de paz. Estos factores representan el principal riesgo de revictimización de las comunidades ya afectadas, además de las emergencias asociadas a eventos naturales y/o antrópicos que se producen de manera cíclica⁴. Las pocas oportunidades socio-económicas en las zonas rurales alejadas, la débil presencia del Estado y limitada distribución de la tierra y la importante llegada de venezolanos y retorno de colombianos desde Venezuela, muchos de los cuales tienen necesidades de protección internacional y falta de acceso a derechos y servicios básicos, crean nuevas necesidades humanitarias multisectoriales en diferentes regiones, a pesar de los esfuerzos del Estado y la complementariedad de la respuesta humanitaria en términos de atención y prevención de la población afectada. La implementación del acuerdo de Paz entre el Gobierno de Colombia y las FARC-EP representa un reto en medio de los diálogos de paz ahora con el ELN y las elecciones presidenciales que se realizarán en 2018, ante las expectativas e incertidumbre de quienes le apuestan a un mejor futuro a pesar de las brechas y necesidades existentes.

PRIORIZACIÓN SECTORIAL HUMANITARIA

1

Necesidades y vacíos en la prevención, protección y atención de afectados por con licto armado y violencia generalizada.



Persisten las violaciones de Derechos Humanos e infracciones del DIH así como las necesidades humanitarias en el escenario pos acuerdo que requieren atención urgente. La reconfiguración y accionar de los grupos armados tradicionales en el conflicto y nuevos grupos armados sin identificar que luchan por el control territorial en zonas de donde salió las FARC EP continúa causando un impacto humanitario y de protección. Existe en algunas zonas un incremento de hechos victimizantes como desplazamientos masivos en zonas rurales y urbanas, al igual que reclutamiento forzado, amenazas, homicidios, violencia sexual, desapariciones y afectaciones por minas antipersonal, municiones sin explotar y artefactos explosivos improvisados (MAP/MUSE/AEI). Las restricciones a la movilidad y al acceso de bienes y servicios como parte del control social y territorial, invisibilizan otros hechos, evidenciando vacíos y superando en muchas ocasiones la capacidad de respuesta Estatal. Se requieren acciones y estrategias en materia de prevención, protección, fortalecimiento de capacidades y atención de la población afectada y en riesgo. Estas se concentran particularmente en comunidades indígenas y afrocolombianas, líderes y lideresas sociales, defensores y defensoras de derechos humanos, mujeres, NNAJ, personas en proceso de reincorporación a la vida civil, e incluso personas que requieren protección internacional y afectados por doble o múltiples afectaciones a causa del conflicto armado, la violencia generalizada, los desastres causados por amenazas naturales y ahora ante la llegada continua de personas desde Venezuela.

¹ En este grupo se incluye al Ejército de Liberación Nacional (ELN) y al Ejército Popular de Liberación (EPL)

² GAPD también llamados por el Gobierno Grupos Armados Organizados (GAO) de los cuales hace parte las Autodefensas Gaitanistas de Colombia-AGC- y el Clan del Golfo y otros Grupos criminales organizados de orden local, nacional y transnacional

³ Las Fuerzas Armadas Revolucionaria de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP) principal grupo armado no estatal que hizo parte del conflicto en Colombia. Posterior a la firma del acuerdo de paz con el Gobierno de Colombia es partido político fundado en agosto de 2017 por ex integrantes de la antigua guerrilla y hoy denominados Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC).

⁴ Se denomina desastre de origen natural a la manifestación de un fenómeno físico cuyo origen se encuentra en los procesos naturales de transformación y modificación de la tierra y el ambiente- por ejemplo, un terremoto, una erupción volcánica, un tsunami o un huracán y que puede resultar en la muerte o lesiones a seres vivos, daños materiales o interrupción de la actividad social y económica en general. Un evento antrópico se relaciona con un fenómeno generado por la actividad humana en la producción, distribución, transporte y consumo de bienes y servicios y en la construcción y uso de infraestructura y edificios. Fuente UNGRD.

2

Pérdida, restricción al acceso y falta de garantías a medios de vida agrícola y no agrícola afectan la seguridad y la seguridad alimentaria y nutricional.



Los niños y niñas menores de cinco años, las personas mayores y las mujeres gestantes y lactantes de las comunidades indígenas, afrocolombianas y campesinas que viven en zona rurales alejadas de Colombia, presentan un alto deterioro de los medios de vida agrícola y no agrícolas por la afectación directa e indirecta de sus cultivos y el accionar de los diferentes grupos armados a través de restricciones de acceso y movilidad por la persistencia de minas antipersonal (MAP), confrontaciones, eventos de desastres, contaminación ambiental por los efectos de la explotación de recursos y falta de tenencia de la tierra, configuran situaciones de múltiple afectación. Estas limitaciones en la siembra y toda la cadena productiva (transporte y comercialización) impactan en la seguridad alimentaria, creando riesgos de desnutrición e incluso muerte de niños y niñas, particularmente en menores de cinco años. Los vacíos y necesidades por la falta de provisión oportuna y adecuada de asistencia alimentaria y hábitos saludables, requieren de soluciones integrales con un enfoque multisectorial que brinde una recuperación nutricional y gestión de riesgos, ante los retos que plantea el escenario actual, incluyendo a la población migrante de Venezuela que se encuentra en situación de inseguridad alimentaria y malnutrición.

3

Vacíos en la generación de ingresos, sostenibilidad y recuperación temprana, limitan el restablecimiento de medios de vida.



Se identifican grandes vacíos en el acceso a fuentes de empleo formales y medios alternativos de generación de ingresos con enfoque diferencial, asociados a las necesidades por género, edad y pertenencia étnica de la población víctima. La llegada continua de personas venezolanas, muchas de las cuales tienen necesidades de protección internacional, ha afectado especialmente las zonas fronterizas, impactando la economía local y el mercado laboral, como también el acceso a los servicios básicos, y agravando la condición de vulnerabilidad y pobreza de las comunidades receptoras. Se mantiene la incertidumbre sobre oportunidades de empleo de la población excombatiente dentro del proceso de reintegración y de generación de ingresos sostenibles, producto de la sustitución de la actividad en economías ilegales. Las nuevas dinámicas de violencia generadas por la reorganización y surgimiento de grupos armados organizados y los desastres causados por amenazas naturales, las condiciones climáticas cíclicas y otros fenómenos ambientales, han contribuido en esas afectaciones y generan un reto en el ejercicio de recuperación temprana de las comunidades rurales. Se hace necesario facilitar oportunidades socioeconómicas con enfoque diferencial y multisectorial, asegurando el restablecimiento de los medios de vida (acceso a servicios, proyectos productivos sostenibles), fortalecer las capacidades técnicas, con énfasis en las mujeres, así como una fortalecida presencia y respuesta urgente y eficaz del Estado, en el marco del pos acuerdo.

4

Limitado acceso a servicios de salud en comunidades rurales, genera riesgo en la vida de las personas.



El acceso a servicios de salud, especialmente para comunidades indígenas y afrocolombianas continua con grandes limitaciones. La prestación del servicio en zonas urbanas alejadas de estas comunidades, la ausencia de medicina tradicional, la intermitencia del personal médico por dificultades administrativas, la falta de infraestructura, equipos e insumos médicos, garantías de seguridad, contaminación en zonas con actividad minera, entre otros factores, repercuten negativamente y dificultan la respuesta ante necesidades como salud física, mental y apoyo psicosocial, asistencia a víctimas de violencia sexual y maternidad segura. No solo es necesario estimular respuesta frente a la atención y asistencia en salud, también es necesario considerar estrategias de prevención vinculadas con los sectores de agua, saneamiento básico e higiene y seguridad alimentaria y nutricional por su interconexión y repercusión principalmente en los niños y niñas menores de cinco años, personas venezolanas en situación migratoria irregular y otros grupos vulnerables en riesgo de padecer enfermedades asociadas a los vacíos en otros sectores.

5

Restricción de acceso a la educación y riesgos de protección para los niños, niñas, adolescentes.



Los niños, niñas, jóvenes y adolescentes de comunidades rurales ven afectado el acceso a la educación de diversas maneras. Factores como la distancia, limitaciones a la movilidad por acciones armadas o MAP, la falta de agua segura, alimentación escolar, pobreza, desastres causados por amenazas naturales, falta de oferta, procesos administrativos de los docentes y aspectos normativos (o desconocimiento de los mismos) para el caso de los niños y niñas venezolanos, se encuentran entre los factores que más se relacionan con la deserción escolar. Así mismo, la presencia de grupos armados genera el riesgo de reclutamiento y utilización de niños, niñas, adolescentes y jóvenes y los expone a afectaciones como la violencia sexual. En la vinculación de niños y niñas a actividades se registraron 48 mujeres y 98 hombres menores de 18 años y en delitos contra la libertad y la integridad sexual, 61 hombres menores de 18, mientras 180 mujeres son víctimas⁵. Es importante contar con garantías de acceso a la educación y educación en emergencia con enfoque diferencial, incluyendo acceso pleno al sistema educativo para niños, niñas y adolescentes venezolanos, así como estrategias de prevención, a través de implementación de proyectos para uso y provecho del tiempo libre, estímulo hacia proyectos de vida y fortalecimiento de la escuela como entorno protector.

6

Acceso limitado a agua potable y a sistemas adecuados de saneamiento e higiene.



La disponibilidad y calidad del agua segura de las comunidades rurales, cada vez más presenta un deterioro por múltiples razones. Los ataques contra la infraestructura petrolera que han contaminado fuentes de agua, además de la contaminación del suelo y ambiente por otras actividades extractivas (minería ilegal/ legal), la presencia de minas antipersonales y los eventos desastres causados por amenazas naturales, plantean grandes desafíos asociados a las necesidades y vacíos desencadenados en otros sectores (seguridad alimentaria, salud y medios de vida). Las limitaciones al acceso en términos de agua potable y saneamiento se acentúan en zonas rurales de Colombia afectadas por el conflicto armado y emergencias de origen natural. Se necesita estrategias de complementariedad con las instituciones, tanto para garantizar el acceso de la población a fuentes de agua segura para el consumo, como para prevenir riesgos en otros sectores como salud y seguridad alimentaria y nutricional. Así mismo mejorar la infraestructura de agua y saneamiento, el manejo de desechos sólidos y controlar vectores transmisores de enfermedades; finalmente contar con tecnologías y/o medios adecuados para asegurar el consumo de agua segura de estas comunidades.

7

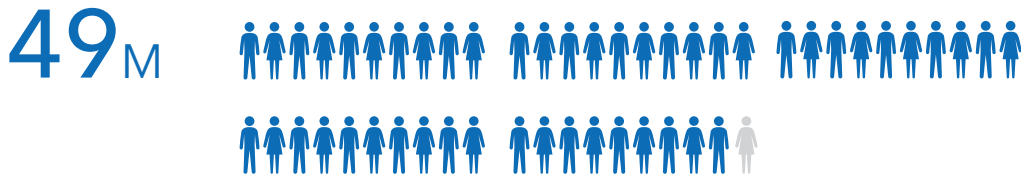
Vacíos en la oferta y disponibilidad de albergues en situaciones de emergencias.



En el escenario de emergencias generadas por desplazamientos masivos, eventos de origen de natural y otras situaciones de conflicto armado y/o violencia generalizada, las comunidades afectadas particularmente indígenas y afrocolombianas, enfrentan situaciones donde los albergues temporales presentan limitaciones en la infraestructura, dotación, privacidad y seguridad, acceso a servicios básicos, al igual que enfoques diferenciales de género y pertenencia étnica, entre otros aspectos. La llegada continua de personas venezolanas, muchas de las cuales tienen necesidades de protección internacional, crea un reto en la respuesta ante la incertidumbre sobre la oferta y toda la implicación de lo que representan los albergues en una situación de eventual flujo masivo. Es necesario considerar y asegurar la oferta y disponibilidad de estos espacios de alojamiento, bajo los principios establecidos y que respondan a los vacíos y limitaciones identificadas. Así mismo, acompañados de acciones y estrategias que permitan el restablecimiento del tejido social y familiar posterior al hecho victimizante, y favorezca la atención de población con necesidades especiales con un enfoque de recuperación temprana.

⁵ Información según Red Nacional de Información (RNI), correspondiente a los años 2015 y 2017

POBLACIÓN TOTAL



NÚMERO DE PERSONAS QUE VIVEN EN ÁREAS AFECTADAS POR CONFLICTOS



NÚMERO DE PERSONAS EN DESPLAZAMIENTO FORZADO (1985-2017)

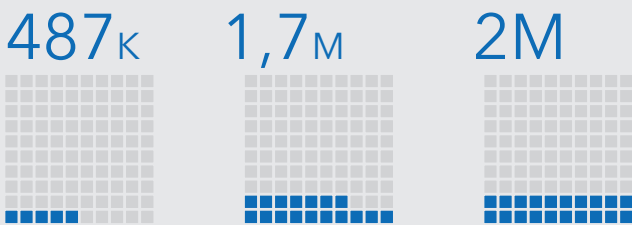


NÚMERO DE PERSONAS CON NECESIDAD DE ASISTENCIA HUMANITARIA (2015 - 2017)



POR GRUPO

DESPLAZAMIENTO INTERNO AFECTADOS POR DESASTRES NATURALES COMUNIDADES ANFITRIONAS

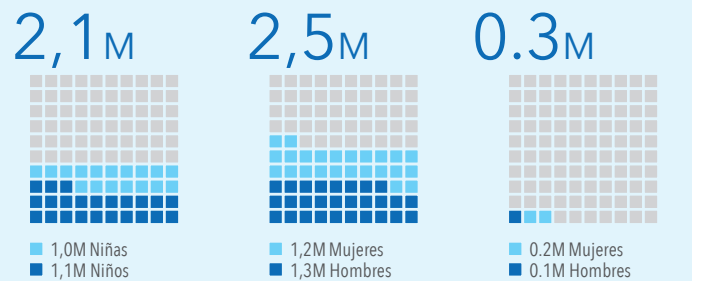


VENEZOLANOS CON VOCACIÓN DE PERMANENCIA



POR EDAD & SEXO

NIÑOS Y NIÑAS (<18 AÑOS) ADULTOS (18-59 AÑOS) ADULTOS MAYORES (>59 AÑOS)



TOTAL HOMBRES TOTAL MUJERES



IMPACTO DE LA CRISIS

Colombia continúa enfrentando necesidades humanitarias como resultado del impacto del conflicto histórico, las emergencias por la violencia generalizada y los eventos de desastres naturales. En el actual escenario de transición del pos-acuerdo, las disputas por el control territorial y las economías ilegales (cultivos de uso ilícito, minería ilegal) por parte de grupos armados históricos como ELN, EPL, los grupos armados posdesmovilización, disidencias FARC EP y otros grupos armados⁵ como parte de la reconfiguración y expansión de actores en los territorios de donde salieron las FARC EP, sigue generando riesgos de protección y necesidades humanitarias en la población civil.

09

FACTORES SUBYACENTES

La débil presencia del Estado en las zonas rurales apartadas, además de las pocas oportunidades socio económicas, vacíos en la inversión social y el difícil acceso a bienes, servicios básicos y medios de vida, aumentan las condiciones de vulnerabilidad de la población. El impacto humanitario ya existente, agudiza de manera desproporcional la situación de desigualdad social y económica creando nuevos y mayores riesgos de protección ante la violencia y explotación sexual, en particular para los grupos poblacionales afrocolombianos e indígenas, mujeres, niños y niñas. Los fenómenos climáticos y las temporadas cíclicas de lluvias y sequía también desencadenan emergencias como inundaciones, deslizamientos de tierra, sequías prolongadas e incendios forestales, afectando particularmente a las comunidades ubicadas en zonas de difícil acceso y alto riesgo por la geografía. Las emergencias por eventos naturales, conflicto y violencia armada, además del daño ambiental producto de la explotación y extracción de recursos naturales configuran un escenario de múltiple afectación en la población.

El impacto positivo esperado en los indicadores humanitarios tras la firma del acuerdo de paz (24 noviembre de 2016) entre el Gobierno colombiano y las FARC-EP no se ha evidenciado y preocupa el aumento y continuidad de las disputas territoriales por los diferentes actores armados, creando escenarios de riesgo en la población civil más vulnerable.

Esta violencia generalizada permite la persistencia de los desplazamientos masivos e individuales, restricciones a la movilidad y al acceso, reclutamiento y utilización de niños, niñas y adolescentes, homicidios contra líderes y lideresas sociales y defensores y defensoras de derechos humanos,

⁵ Vinculados al crimen organizado surgidos de las desercciones y disidencias FARC e incluso alianzas de éstos con otros grupos existentes.

amenazas, control social, violencia sexual, entre otros hechos victimizantes. Al mismo tiempo, el inicio de la fase pública de los diálogos entre el ELN y el Gobierno (8 febrero de 2017) y el anuncio del Cese al Fuego Bilateral Temporal y Nacional (CFBTN) desde el 1 de octubre de 2017 y hasta el 9 de enero de 2018, podría tener un impacto positivo particularmente en las regiones con presencia de este grupo armado, en medio de la incertidumbre que existe ante los vacíos evidentes en procesos de la implementación de algunos puntos del acuerdo de paz con las FARC-EP. Con este panorama y de continuar el accionar de los grupos armados existentes, se seguirán presentando emergencias y agudizando las necesidades humanitarias por la violencia indiscriminada, las infracciones al Derecho Internacional Humanitario (DIH) y las violaciones a los Derechos Humanos.

De acuerdo a información de la Unidad de Atención y Reparación Integral para las Víctimas (UARIV), entre enero 2015 y diciembre 2016 se desplazaron en promedio 13.500 personas cada mes en Colombia, lo que indica una reducción considerable de los desplazamientos individuales frente a años anteriores. Del total de desplazados, las mujeres representan el 52% siendo más significativo en edades adultas y hombres una representación del 47%; sin embargo esta cifra se invierte para la proporción de menores de edad desplazados, evidenciando en los hombres un 51% y mujeres un 48%. El 43% de los desplazamientos son atribuidos a grupos guerrilleros. Los grupos armados desconocidos, además de otras estructuras armadas son los responsables del 57% de las personas desplazadas en este periodo. Se identifican brechas en el registro por barreras que se están presentando en el momento de la toma de las declaraciones de las víctimas, lo que invisibiliza la situación humanitaria y dificulta la respuesta en temas de atención oportuna, reparación y garantías de no repetición. En contraste a ésta situación, según información de Monitor y reporte de los socios humanitarios, los desplazamientos masivos registran un importante incremento (32%) en los primeros diez meses de 2017; preocupa que en este periodo de tiempo las personas desplazadas en eventos masivos representan el 120% del total registrados en todo 2016, casi igual o superior al 2015 cuando había un actor armado más que hacía parte del conflicto armado en Colombia. A pesar de los esfuerzos realizados por el Estado en el escenario de implementación del acuerdo de paz, de continuar el aumento de las personas desplazadas en eventos masivos y la limitada capacidad de respuesta institucional, se resalta la necesidad que se tomen medidas

de desescalamiento del conflicto contra los grupos armados existentes y en tanto que ya se tiene un grupo armado menos en los territorios, de lo contrario las necesidades humanitarias seguirán presentándose en el país.

Otro tema de preocupación radica en los actores perpetradores de los diferentes hechos victimizantes. Según monitoreo de OCHA, el 31 por ciento de los desplazamientos tienen participación de grupos armados desconocidos tanto en acciones unilaterales como en enfrentamientos, evidenciando una tendencia creciente de nuevos actores sin identificar. Las necesidades humanitarias y de protección son un desafío para las autoridades nacionales, ya que se requiere adaptar los marcos normativos e implementación urgente para una respuesta eficaz de la población víctima de estos nuevos grupos armados que continúan generando violencia indiscriminada y generalizada, infracciones y violaciones al derecho internacional humanitario y a los derechos humanos. Se evidencian afectaciones particulares a niños, niñas, adolescentes, hombres y mujeres jóvenes víctimas de reclutamiento y uso, trata de personas y explotación sexual.

Las restricciones a la movilidad y al acceso de bienes y servicios básicos continúan siendo otro impacto humanitario importante del conflicto y de la violencia generalizada. El control social, las amenazas y los enfrentamientos entre actores armados han sido identificadas como las principales causas de estas, tanto en contextos urbanos como rurales.

La identificación y el seguimiento a estas situaciones son particularmente complejos en el actual escenario, donde la presencia de grupos armados logra tener un impacto considerable en la población; el temor a la denuncia repercute en un subregistro de esta clase de eventos, mientras que en casos como toques de queda, circulación de panfletos o la declaración de control de zonas específicas, crea dificultades para cuantificar el alcance de estas restricciones.

Los desastres naturales, las protestas sociales, la explotación de recursos naturales que generan daños ambientales, entre otros eventos antrópicos, también generan restricciones de acceso a la educación, medios de vida, interferencia en misiones médicas, entre otros.

El Equipo Humanitario de País sigue preocupado por las recurrentes ataques y homicidios contra líderes y lideresas sociales, defensores y defensoras de derechos humanos, algunos pertenecientes a grupos étnicos, maestros, estudiantes, funcionarios públicos y población civil en general.

Entre enero de 2015 y octubre de 2017 OCHA ha registrado 1846 eventos de amenazas individuales y dirigidas a grupos amplios de población civil, que se realizan por lo general a través de panfletos o mensajes intimidantes, incluso amenazas de violencia sexual aunque no exclusivamente para lideresas sociales.

Si bien los actores perpetradores son en muchos casos desconocidos (49%), los grupos armados postdesmovilización figuran como los principales responsables (32%) de este tipo de ataques, sin dejar de lado los grupos armados no estatales (18%).

Estas agresiones contra líderes y lideresas generan desafíos en términos de protección e implicaciones humanitarias por la ruptura de la estructura organizativa y social al interior de las comunidades más vulnerables y apartadas, que en muchas ocasiones no cuentan con mecanismos de protección por parte del Estado y están expuestas a riesgos por las dinámicas en sus territorios, además de las repercusiones en la implementación de los acuerdos de paz. Hay diferencias en las cifras de acuerdo a las metodologías y tiempos utilizados por cada fuente, tal como lo describe la ONG Pacifista⁶.

La Defensoría del Pueblo reporta 67 asesinatos y un caso en verificación, ONUDDHH en relación con la dinámica de homicidios contra defensores de DDHH en su ejercicio de liderazgo reporta 61 casos confirmados y 18 casos están en proceso de verificación y la Fundación Paz y Reconciliación reporta 55 casos entre noviembre 24 de 2016 a 11 de julio de 2017. En todo caso, esta cifra representa un espectro conservador del universo de asesinatos reportados contra personas que luchan por los derechos individuales y colectivos en Colombia.



Desplazamiento forzado⁷

Colombia es el país con el mayor número histórico de desplazados con 7.3 millones, delante de Siria (6,3), Sudán (3.3), Irak (3,0) y República Democrática del Congo (2.2).

Acorde a la tendencia mundial de relación entre desplazamiento interno y refugio, Colombia es uno de los seis países con mayor número de desplazamiento y mayor número de población refugiada. Hay 340.000 colombianos refugiados o en situación similar a la de los refugiados, ubicados principalmente en Panamá, Ecuador y Venezuela.

De acuerdo a cifras de la UARIV, entre 1985 y agosto 2017 cerca de 7.3 millones de personas han sido desplazadas en Colombia. Para el período comprendido entre enero de 2015 y diciembre 2017 se estima un total de 487.129 personas desplazadas.

⁶ <http://pacifista.co/lideres-asesinados-por-que-no-hay-una-sola-cifra>

⁷ Según el informe global de desplazamiento interno de 2017, en total 40,3 millones de personas viven en condición de desplazamiento en el mundo. IDMC (internal displacement monitoring centre, por sus siglas en inglés). http://nrc.org.co/index.php?option=com_content&view=article&id=216%3Aconflicto-desplaza-a-171-000-personas-en-colombia-2016&catid=23%3Asituacion-humanitaria&Itemid=101

En el 2015, se desplazaron 215.877 personas según cifra oficial. Dado el alto subregistro y rezago desde el 2016 para la inclusión de las personas en el registro y consolidación de la información, se estimó la población desplazada en aproximadamente 271.252 personas⁸ para el 2016 y 2017. De este total, el 52 por ciento corresponde a mujeres (adultas y niñas) y 46 por ciento a menores de 18 años.

Los departamentos de Valle del Cauca, Antioquia, Chocó, Nariño, Cauca y Norte de Santander concentraron el 61 por ciento de la población desplazada, evidenciándose un impacto en las comunidades indígenas (6%) y afrocolombianas (17%)⁹.

Según el monitoreo de OCHA, entre enero 2015 y octubre 2017 las comunidades indígenas y afrocolombianas representaron el 79 por ciento de la población desplazada en eventos masivos¹⁰. En los primeros 10 meses de 2017, el ELN ha sido responsable del 45 % del total de personas desplazadas masivamente, por su participación en enfrentamientos con grupos armados posdesmovilización, por acciones unilaterales y en menor medida por confrontaciones con la Fuerza Pública, disidencias FARC EP y otros grupos armados.

En 2017 se han identificado desafíos relacionados con el registro de la población desplazada. Vacíos institucionales en algunos casos relacionados a la cooptación y amenazas de los grupos armados contra los funcionarios responsables e incluso a la misma población, que dificultan el procedimiento administrativo desde el nivel local para

tomar las declaraciones individuales y para caracterizar los desplazamientos masivos. Estas barreras representan limitaciones en el monitoreo general de la situación y para determinar la respuesta tanto individual como colectiva de la población desplazada. Otras limitantes están en la aplicación de directrices relacionadas a fechas de los hechos, actores perpetradores y un aparente cierre del registro.

Una de las principales apuestas para la atención a población desplazada está relacionada al diseño e implementación de acciones de recuperación temprana, especialmente para la población en situación de desplazamiento prolongado que no ha superado las necesidades y permanece en situación de vulnerabilidad y pobreza¹¹. Según la Primera Encuesta Nacional de Víctimas¹² la población con necesidades especiales como mujeres cabeza de hogar, adultos mayores y personas con discapacidad, son quienes ven más limitados el acceso a oportunidades, el 83.3% de la población desplazada entre 1985 y 2013 vive en condiciones de pobreza y el 35.5% en condiciones de indigencia.

Se deben tener en cuenta las necesidades locales con un enfoque diferencial, en particular las de la población desplazada y revictimizada, asegurando soluciones duraderas y sostenibles como parte de la integración de la centralidad de la protección. Es importante advertir sobre las potencialidades de los procesos organizativos de diferentes grupos poblacionales, especialmente comunidades indígenas y consejos comunitarios, como un factor clave para avanzar en la implementación de los procesos de reparación colectiva y formalización de tierras de las comunidades retornadas sin acompañamiento¹³.

⁸Se utilizó una metodología estadística con el fin de proyectar el consolidado anual, dado los vacíos de información en el año 2017 evidenciados en el subregistro y en la consolidación de la información. Se decidió realizar una proyección con datos de 2009 a 2016 del RUV; además se estimó un Modelo Estacional Autorregresivo de Medias Móviles (SARIMA por sus siglas en inglés), donde el desplazamiento en el mes de 2017 está en función del desplazamiento forzado del mes anterior, el valor del año anterior, la media móvil del mes anterior, la media móvil del año anterior, la cantidad de víctimas de desplazamiento masivo en el mes, y finalmente los errores del modelo.

⁹ Sobre el total del censo nacional del 2005, donde la población indígena representa el 3.4 % y la población afro el 10.5 %

¹⁰ A partir de 50 personas en un mismo evento - 10 familias

¹¹ Según la Encuesta Goce Efectivo de Derechos (EGED) del DANE 2014, el 91.1% de los encuestados pertenece a los estratos socioeconómicos 0, 1 y 2

¹² PENV, realizada por la Contraloría General de la República en 2013. [http://www.contraloriagen.gov.co/documents/155638087/161621822/Libro_ENV_CGR-2013_\(16-01-2015\).pdf](http://www.contraloriagen.gov.co/documents/155638087/161621822/Libro_ENV_CGR-2013_(16-01-2015).pdf)

¹³ El 78,6 por ciento de los hogares que han sufrido desplazamiento forzado ha retornado a sus lugares de origen o están reubicados, según el INFORME DEL GOBIERNO NACIONAL A LAS COMISIONES PRIMERAS DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA, disponible en https://www.unidadvictimas.gov.co/sites/default/files/documentos_biblioteca/INFORME%20CONGRESO%20VF.pdf

Restricciones a la movilidad y al acceso a bienes y servicios básicos [xxx](#)

De acuerdo con el monitoreo de OCHA, entre enero de 2015 y octubre 2017 más de 4.5 millones de personas fueron afectadas por restricciones a la movilidad y limitaciones al acceso de bienes y servicios por eventos relacionados con violencia armada. Las acciones unilaterales, destacándose los paros armados por parte de los grupos armados posdesmovilización como las AGC (51%) y los grupos armados no estatales como FARC EP y ELN (46%) son los principales responsables de estas limitaciones. En los primeros diez meses de 2017 se registran afectados por estas restricciones más de 105.000 personas; los actores armados sin identificar tienen una participación del 25 por ciento en los eventos, seguidos de los grupos armados no estatales como disidencias FARC EP y ELN responsables del 37% de los eventos (22% y 15% respectivamente) y los GAPD con el 17 por ciento. No obstante, la reconfiguración de grupos armados amplía la responsabilidad compartida, expresada en que el 20% de los eventos se deben a enfrentamientos entre varios actores armados incluyendo la Fuerza Pública. Respecto a los grupos poblacionales, el impacto persiste en las comunidades de la región Pacífico, particularmente en Nariño y Chocó con el 48 por ciento de los eventos registrados en los primeros diez meses del año y con una particular afectación en población afrodescendiente e indígena. También se destacan casos en Norte de Santander y Antioquia, donde amenazas contra el transporte público y ataques contra un oleoducto tanto por el ELN como por GAPD restringieron el acceso y la libre movilidad a más de 53.000 personas, en zona rural y urbana.

Algunas de las restricciones más recurrentes son las limitaciones a la movilidad, limitaciones de acceso a medios de vida y actividades diarias de sustento que afectan la seguridad alimentaria de las comunidades, con un impacto en los niños, niñas y adolescentes como grupos vulnerables de especial atención, debido a las restricciones y/o pocas oportunidades para el acceso a la educación. En muchas ocasiones estas prácticas se dan como mecanismo de autoprotección de las comunidades o por imposición del actor armado, configurando situaciones de confinamiento sobre todo en lugares apartados y con dificultades de acceso tanto por las condiciones físicas del terreno o por la presencia de Minas Antipersonal, Munición Sin Estallar y Artefactos

Explosivos Improvisados (MAP/MSE/AEI). Inquieta la naturalización y falta de denuncias de las violaciones que se dan en el marco de estos controles, porque generan necesidades humanitarias y de protección.

El impacto de estos eventos, combinado con el limitado acceso a la información y los vacíos en identificar el número de personas afectadas, las dinámicas de violencia y la poca presencia en terreno para hacer seguimiento, plantean retos en materia de monitoreo, presencia humanitaria y protección de civiles.

A diferencia de años anteriores, el acceso humanitario de los organismos internacionales en 2017 ha estado en riesgo por los cambios en la seguridad y el contexto; se identificaron al menos 25 restricciones que causaron interferencia en la operación de actores humanitarios en el terreno.

Entre mayo y junio, ataques y amenazas directas de grupos armados contra personal de organismos internacionales impidieron la continuidad de acciones, particularmente en Meta y Guaviare. En 14 municipios de cinco departamentos también se identificaron riesgos para la seguridad del personal humanitario, obligando a suspender misiones humanitarias como medida de prevención. En septiembre, socios humanitarios de Meta, Chocó y Nariño suspendieron actividades como entregas de alimentos y seguimiento de la situación humanitaria en áreas apartadas y de baja presencia institucional. Estos incidentes resultan en la reducción del espacio humanitario y en consecuencia en la restricción de acceso para atender a personas con necesidades. Preocupa la seguridad del personal al mismo tiempo que el impacto en las operaciones, tanto en tiempos como en costos, dificultando la oportunidad y eficacia en la respuesta.

Población en situación de vulnerabilidad

NIÑOS, NIÑAS, JÓVENES Y ADOLESCENTES EN CONFLICTO ARMADO

El riesgo de reclutamiento y utilización de niños, niñas, adolescentes y jóvenes se mantiene en el país. Si bien los casos han disminuido desde que las FARC-EP acordaron detener el reclutamiento, se han reportado eventos de uso de niños, niñas y adolescentes, incluso presuntos casos de NNA venezolanos y afectación a sus derechos por parte de otros grupos armados no estatales, grupos posdesmovilización y grupos disidentes. Factores como la pobreza y la falta de acceso a servicios básicos, estimulan la vinculación de NNAJ a los grupos armados y los expone a afectaciones como la violencia sexual y el rompimiento del tejido social familiar y comunitario.

El informe anual 2016 de UNICEF en Colombia¹⁴ resalta que, hasta abril de 2017, el porcentaje de niños, niñas y adolescentes víctimas de cualquier hecho victimizante superaba el 32% y que, entre septiembre de 2011 y junio de 2016, se registró un total de 1.556 casos de reclutamiento y utilización de niñas en 29 departamentos del país.

Frente a la violencia sexual, indica que entre 2008 y 2012, hubo por lo menos 48.914 niños, niñas y adolescentes víctimas de este hecho victimizante, cuyos presuntos perpetradores eran miembros de grupos armados. Entre estas víctimas, el 84% eran niñas y y el 16% niños. Así mismo, revela que entre el 2009 y el 2014 por lo menos 107.698 mujeres fueron examinadas por un forense por supuestas agresiones sexuales. Entre ellas, las niñas y adolescentes representaron el grupo más amplio, con el 88% del número total de casos (94.675). Estas cifras dan un panorama del impacto en esta población vulnerable y las necesidad de medidas urgentes a implementar para la protección de la niñez.

La escuela como entorno protector, se ve amenazada por la presencia de minas antipersona, acciones bélicas, ausencia de docentes y débil infraestructura, entre otros aspectos. De acuerdo con el monitoreo de OCHA en 2017, diferentes acciones armadas impidieron que al menos 1,584 niños y niñas accedieran al servicio de educación en zona rural. En zonas urbanas de ciudades como Medellín, el temor por las disputas, el riesgo y casos de vinculación de NNA a las bandas ha causado la deserción aproximada de 183 niños y niñas. Este escenario vuelve aún más vulnerables a los niños, niñas, adolescentes y jóvenes especialmente de comunidades étnicas de las zonas rurales. Sumado a ello, las situaciones de desplazamiento masivo y restricciones a la movilidad, la falta de garantías de acceso a agua segura, alimentación apropiada y asistencia en salud física y mental, hacen de los menores de edad, incluyendo a los NNA venezolanos que están llegando al país y no pueden acceder a servicios como educación, una población vulnerable prioritaria de respuesta humanitaria.

MUJERES Y NIÑAS ANTE LA DISCRIMINACIÓN Y VIOLENCIA BASADA EN GÉNERO (VBG)

El informe de resultados 2016 de ONU Mujeres¹⁵, expone que el conflicto armado ha exacerbado históricamente la violencia contra mujeres y niñas. Resalta que el 92% de las víctimas de delitos contra la libertad y la integridad sexual en el marco del conflicto han sido mujeres, e indica según sus fuentes de información, que casi la mitad de víctimas del conflicto armado han sido mujeres y niñas, quienes han sufrido afectaciones por desplazamiento, homicidio, amenaza, desaparición forzada, etc. Esto lo refuerza la UARIV, pues según sus datos, el 52% de las personas que se desplazaron individualmente entre 2015 y 2017 fueron mujeres.

En ese mismo escenario, la Defensoría del Pueblo alertó en mayo de 2017 sobre riesgos vigentes de violencia sexual contra mujeres y niñas en 85 municipios de 19 departamentos, debido a un proceso de expansión de grupos armados organizados y por dinámicas de control de distintas economías ilegales (la minería ilegal y los cultivos ilícitos) y otros delitos como la trata de personas con fines de explotación laboral o sexual. Los actores de protección así mismo alertan de un auge de la violencia intrafamiliar; hay casos en los se han identificado prácticas de violencia intrafamiliar crueles, cuando por ejemplo los perpetradores han estado en contacto con técnicas vinculadas al conflicto armado y a la tortura, las cuales aplican en el interior de la familia.

¹⁴ <https://www.unicef.org.co/informes/informe-anual-unicef-colombia-2016-version-espanol-0> (el cual cita varias fuentes)

¹⁵ <http://colombia.unwomen.org/es/biblioteca/publicaciones/2017/05/informe-de-resultados-2016>

Las diferentes dinámicas en el marco del conflicto armado, los desastres de origen natural y situaciones de crisis como el flujo migratorio venezolano, hacen que las mujeres y niñas (sin dejar de lado también a la población LGBTI) estén más vulnerables a riesgos de violación de sus derechos. Se exponen a riesgos de violencia sexual y embarazos prematuros, lo que irrumpe su desarrollo y acceso a oportunidades; enfrentan limitadas garantías de seguridad, privacidad y dignidad cuando por algún hecho victimizante deben desplazarse hacia los albergues; encuentran obstáculos en el acceso a salud mental, sexual y reproductiva y cuentan con menos herramientas necesarias para la recuperación de medios de vida y alternativas de generación de ingresos. Los hogares encabezados por mujeres son en general más elevados entre la población desplazada que los hogares encabezados por hombres, y requieren consideraciones especiales en materia de protección y medios de vida. Estos y otros hallazgos identificados en las evaluaciones MIRA dan cuenta de la situación de vulnerabilidad de este grupo poblacional.

GRUPOS ÉTNICOS: COMUNIDADES INDÍGENAS Y AFRODESCENDIENTES

Según estimaciones de OCHA, el 77 por ciento de los desplazamientos masivos en 2017 se ha dado en la región Pacífico, zona con predominio de comunidades indígenas y afrodescendientes. De igual forma, para el trimestre comprendido entre julio y septiembre de 2017, se identifican restricciones al acceso en al menos 4.256 indígenas pertenecientes a esta región, con afectación particular en niños, niñas y adolescentes. Por ejemplo, en Nariño, Chocó, y Putumayo cerca de 650 niñas y niños de comunidades indígenas Awá, Wounaan, niños y niñas afrocolombianos y campesinos tuvieron limitaciones de acceso a la educación en zona rural, causada por presencia de actores y acciones armadas. Amenazas, contaminación por MAP/MUSE en cercanía de escuelas, enfrentamientos y daño de bien civil (quema de transporte fluvial escolar), entre otras acciones de control territorial además de desplazamientos masivos, involucran a disidencias FARC EP, grupos armados desconocidos, ELN y grupos armados pos desmovilización. De otro lado, población indígena y afrocolombiana de La Guajira presentan grandes necesidades de seguridad alimentaria y nutrición, agua y saneamiento, protección y salud. Afectaciones en el marco del conflicto y factores como la pobreza y la débil atención estatal, generan que muchas de las comunidades indígenas se encuentren en peligro de desaparición.

POBLACIÓN VENEZOLANA EN COLOMBIA

En los últimos tres años, diversos hitos han dinamizado el flujo migratorio desde Venezuela. En el año 2015 fueron las deportaciones y retornos voluntarios y no voluntarios masivos en el marco del estado de emergencia de casi 25.000 colombianos; un año después fue la reapertura de la frontera con Colombia.

Este año, el deterioro económico y dinámicas en la política, han generado una llegada continua importante de venezolanos y colombianos retornados, algunos de ellos con necesidad de protección internacional.

Si bien algunos lo hacen de manera transitoria (hacia países como Ecuador y Perú), muchos otros ingresan con vocación de permanencia y sin garantías socioeconómicas, generando un impacto en la vida y economía local. Los diferentes perfiles de personas llegando desde Venezuela previamente identificados ahora incluyen: i) Colombianos víctimas en el exterior; ii) Colombianos que eran solicitantes de asilo, refugiados o estaban en necesidad de protección; iii) Niños y niñas indocumentados de padres colombianos y niños y niñas no acompañados; iv) Extranjeros en necesidad de protección internacional; v) Extranjeros buscando regularización migratoria y vi) Extranjeros buscando regularización migratoria. De acuerdo a cifras oficiales de Migración Colombia y proyecciones a fin de año 2017¹⁶, se estima que al menos 700.000 ciudadanos venezolanos entre regulares e irregulares se encontrarían dentro del territorio nacional con vocación de permanencia.

El Equipo Humanitario de País sigue preocupado por la vulnerabilidad de las poblaciones en la zona de frontera y por las posibles necesidades de protección de la población proveniente desde Venezuela que entra al territorio colombiano, en particular mujeres, mujeres gestantes, niñas, niños y adolescentes en riesgo de abuso, trata y explotación sexual. Evaluaciones de necesidades MIRA en las zonas de frontera han expuesto la vulnerabilidad de la población venezolana que, en situación de pobreza y ante la falta de documentación y/o el desconocimiento de sus derechos ven limitado el acceso adecuado a la alimentación, a la educación, a la salud y al trabajo en condiciones dignas, entre otros aspectos.

¹⁶ Metodología de proyección basada en ingresos netos mensuales (Cifras PMU).

DESASTRES NATURALES

Colombia es un país altamente vulnerable a los desastres de origen natural. Según el Índice para la gestión de riesgos (INFORM por sus siglas en inglés)¹⁷ Colombia registra un índice muy alto (5.4) y se posiciona el lugar 30 entre 191 países del mundo en cuanto a crisis humanitaria, teniendo en cuenta indicadores sobre exposición a riesgos y amenazas por desastres naturales, la vulnerabilidad de las comunidades y la capacidad de respuesta tanto de infraestructura como de las instituciones locales.

De acuerdo con información de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD)¹⁸, entre enero de 2015 y octubre de 2017 un total de 1.718.109 personas se vieron afectadas por desastres de origen natural, tanto por sequía, particularmente el fenómeno del niño en 2015, como las temporadas de lluvias cíclicas.

En los primeros diez meses de 2017, aproximadamente 523.640 personas resultaron afectadas, de las cuales el 78 por ciento tuvo el mayor impacto por inundaciones; entre otros eventos que también desencadenaron emergencias están los vendavales, deslizamientos y crecientes súbitas. Los departamentos con las mayores afectaciones están en la región Pacífico (Chocó, Cauca y Valle del Cauca) y Caribe (Antioquia, Bolívar y Córdoba). En 2017 las emergencias se concentraron principalmente en Córdoba y Chocó (42%),

no obstante se destaca la emergencia en Mocoa (Putumayo) de abril, a causa de fuertes lluvias y la consecuente avalancha que destruyó una gran parte de la ciudad y dejó sin vida a más de 300 personas, entre múltiples afectaciones sectoriales.

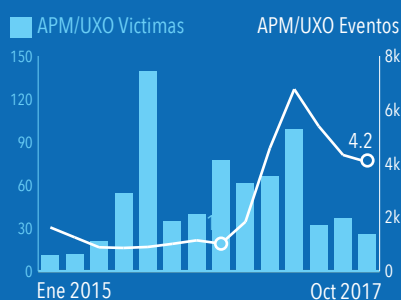
Estas emergencias, a pesar de ser atendidas por la UNGRD con ayuda humanitaria inmediata y obras de infraestructura, superan las capacidades locales cuando son de gran magnitud en muchas ocasiones. Sin embargo, en zonas rurales apartadas se evidencian vacíos en la respuesta y necesidades asociadas a los medios de vida por la pérdida de cultivos para el sustento, poniendo en riesgo la seguridad alimentaria y nutrición sobre todo de mujeres, niños y niñas. Adicionalmente la población, que vive en condiciones de vulnerabilidad por presentar altos niveles de pobreza necesidades básicas insatisfechas, muchas veces es población víctima del conflicto, algunas con necesidades de protección internacional. Esta población generalmente está expuesta a riesgos por la violencia generalizada, actividades relacionadas con economías ilícitas con repercusiones en el medio ambiente (minería ilegal) u otros eventos antrópicos. Actividades extractivas como la minería causa un gran impacto por la contaminación con mercurio en ríos y cuencas hidrográficas, difícil de estimar por el caudal pero afectando las fuentes de agua y especies acuáticas¹⁹. Esto representa una amenaza directa a la salud humana, debido a que frecuentemente son ingeridas por las poblaciones que se abastecen en lugares cercanos de donde se realiza la actividad minera. Otros sectores que preocupan por esta contaminación son seguridad alimentaria y nutrición, agua y saneamiento, salud (incluyendo salud reproductiva) y recuperación temprana, las cuales repercuten en las condiciones de vida de las personas.

¹⁷ <http://www.inform-index.org/Countries/Country-Profile-Map>

¹⁸ UNGRD. Reporte de Emergencias anual. Categorías incluidas: sequía, Inundación, Vendaval, Sismo, Avalancha, Deslizamiento, Granizada, Incendio Forestal, Mar De Leva, Avenida Torrencial, Creciente Súbita, Erosión, Accidente Minero, Falla Geológica y Tormenta Eléctrica.15. <http://colombia.unwomen.org/es/biblioteca/publicaciones/2017/05/informe-de-resultados-2016>

¹⁹ Fuente: FEAT (the Flash Environmental Assessment Tool) http://www.unocha.org/sites/dms/Documents/FEAT_Version_1.1.pdf

VICTIMAS MAP/MUSE



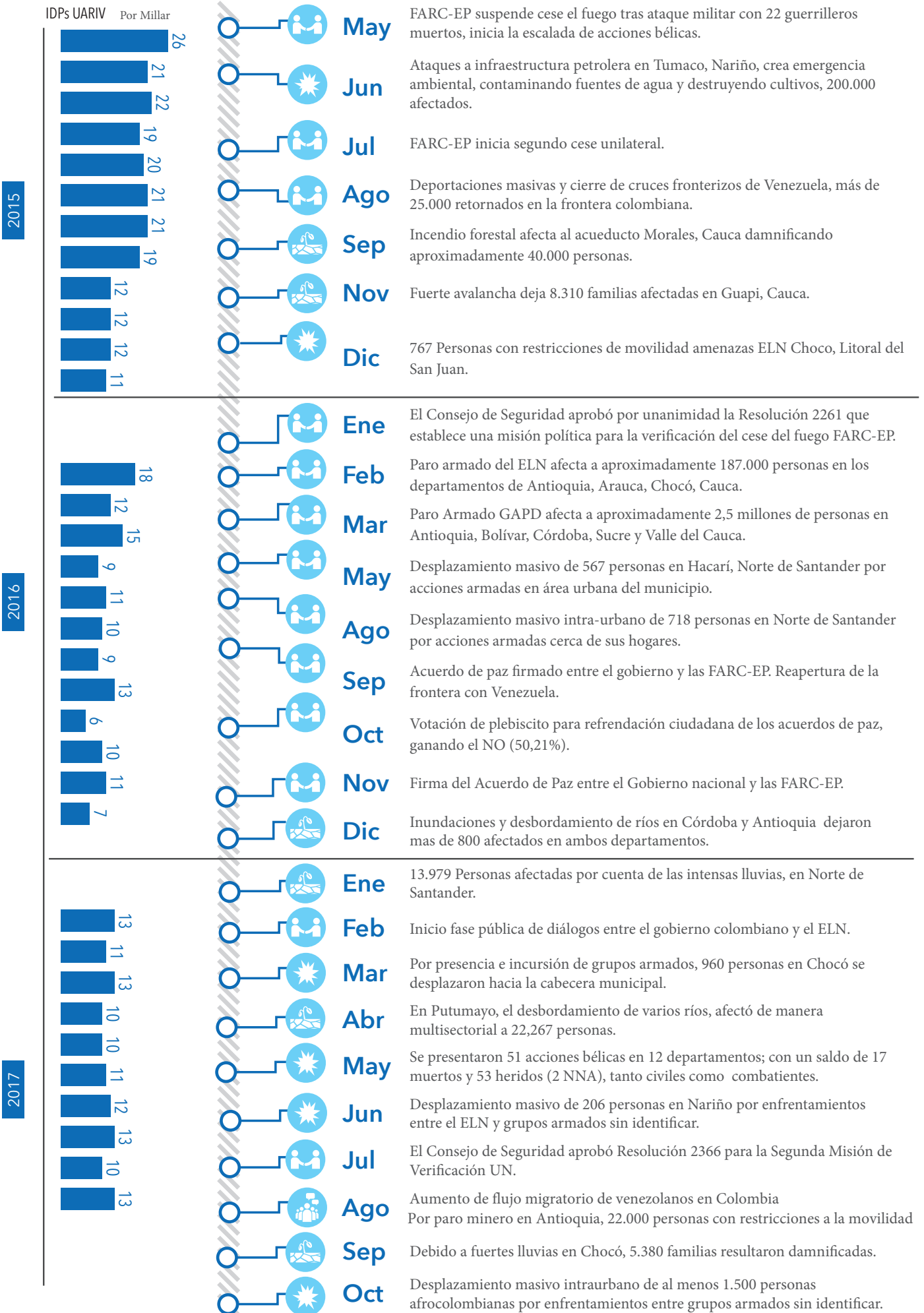
DESPLAZAMIENTO POR SEXO



DESPLAZAMIENTO EN NIÑOS Y NIÑAS



DESPLAZAMIENTO INTERNO (EN MILES)



DESAGREGACIÓN DE

PERSONAS CON NECESIDADES

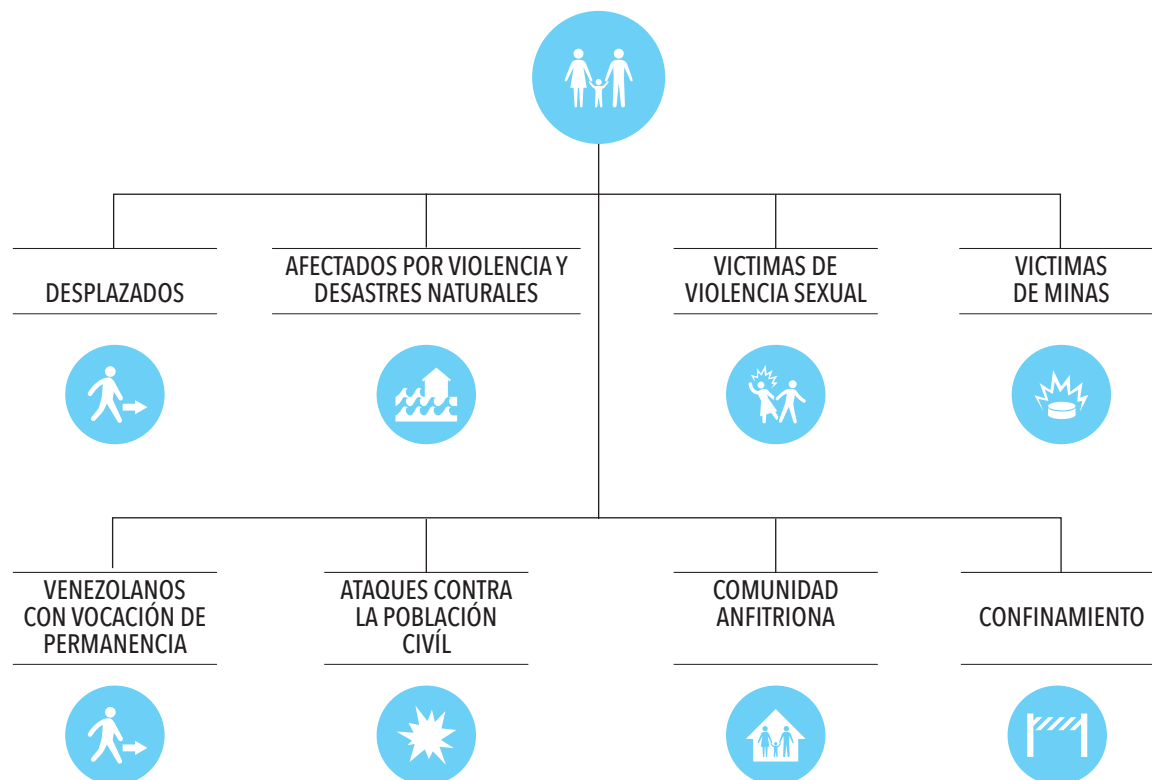
El cálculo del número de personas con necesidades humanitarias en Colombia para 2018 se estima por medio del número de afectaciones humanitarias, que incluye el número de personas afectadas por conflicto armado, violencia generalizada, desastres naturales y personas provenientes de Venezuela; esta información se basa en las tendencias de los últimos tres años (2015-2017).

Adicionalmente se incluye el número de personas directamente afectadas por el conflicto armado (desplazadas, víctimas de minas, víctimas de violencia sexual, población confinada), y también indirectamente como los son las comunidades anfitrionas, para lo cual se usa información

oficial sobre la vulnerabilidad de los que viven en zonas con un elevado número de desplazados internos.
















Al mismo tiempo, al número de personas afectadas por desastres de origen natural (Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres) se agregan los datos de desplazamiento reportados por la Unidad de Atención y Reparación Integral de las Víctimas, identificando territorios y poblaciones que presentan ‘doble afectación’. Esta población representa el total de los afectados por eventos de desastres que viven en zonas de conflicto y que directa o indirectamente se ven afectados por ambas dinámicas.

PERSONAS CON NECESIDADES (2015-2017)



PERSONAS EN NECESIDAD

(2015-2017)

		POR STATUS											
		Proyecciones de población 2017	Personas desplazadas por expulsión	Victimas de Minas	Afectados por desastres naturales	Delitos contra la libertad e integridad sexual	Personas con limitaciones de acceso, movilidad y confinamiento	desplazamiento masivo	ataques contra la población civil	Población Venezolana con vocación de permanencia	Comunidades anfitrionas	Doble Afectación	Población con necesidades
	LA GUAJIRA	1 MM	5 K	0	17 K	44	0	0	83	54 K	11 K	14.388	86 K
	MAGDALENA	1 MM	11 K	0	168 K	33	0	0	49	34 K	49 K	65.496	263 K
	META	998 K	9 K	29	33 K	28	0	247	57	4 K	36 K	26.085	83 K
	NARIÑO	2 MM	38 K	19	49 K	131	0	4 K	130	279	141 K	24.519	229 K
	NORTE DE SANTANDER	1 MM	35 K	27	32 K	46	0	6 K	211	97 K	130 K	21.524	294 K
	PUTUMAYO	354 K	13 K	17	113 K	59	0	210	99	0	33 K	99.830	159 K
	QUINDÍO	572 K	1 K	0	9 K	17	0	0	20	4 K	16 K	8.148	31 K
	RISARALDA	963 K	7 K	0	32 K	10	0	950	53	4 K	53 K	31.573	96 K
	SAN ANDRÉS	78 K	23	0	4 K	0	0	0	2	0	4	0	4 K
	SANTANDER	2 MM	5 K	0	32 K	18	0	0	38	21 K	26 K	15.520	84 K
	SUCRE	868 K	7 K	1	53 K	7	0	0	58	22 K	38 K	27.448	119 K
	TOLIMA	1 MM	21 K	12	18 K	50	0	0	75	16 K	65 K	11.388	120 K
	VALLE DEL CAUCA	5 MM	72 K	3	44 K	163	885	835	440	17 K	339 K	34.757	472 K
	VAUPÉS	45 K	410	0	39	0	0	0	7	0	798	39	1 K
	VICHADA	75 K	1 K	0	10 K	3	0	0	11	0	873	2.540	12 K
	TOTAL	49 MM	487 K	322	2 MM	1 K	10 K	35 K	3 K	700 K	2 MM	1.168.090	5 MM

*Children (<18 years old)

PERSONAS EN NECESIDAD

(2015-2017)

	POR STATUS											TOTAL
	Proyecciones de población 2017	Personas desplazadas por expulsión	Victimas de Minas	Afectados por desastres naturales	Delitos contra la libertad e integridad sexual	Personas con limitaciones de acceso, movilidad y confinamiento	desplazamiento masivo	ataques contra la población civil	Población Venezolana con vocación de permanencia	Comunidades anfitrionas	Doble Afectación	Población con necesidades
AMAZONAS	78 K	306	0	7 K	0	0	0	1	0	714	4.178	8 K
ANTIOQUIA	7 MM	71 K	52	110 K	135	0	4 K	293	53 K	320 K	92.947	555 K
ARAUCA	268 K	7 K	26	62 K	20	0	148	218	3 K	16 K	61.541	88 K
ATLÁNTICO	3 MM	2 K	0	25 K	3	0	0	32	115 K	12 K	13.942	153 K
BOGOTÁ, D.C.	8 MM	1 K	0	4 K	6	0	0	51	114 K	145 K	4.152	265 K
BOLÍVAR	2 MM	15 K	9	170 K	54	0	0	83	76 K	41 K	34.923	302 K
BOYACÁ	1 MM	2 K	0	17 K	2	0	0	15	307	7 K	11.648	26 K
CALDAS	992 K	2 K	0	18 K	3	3 K	0	13	1 K	11 K	16.317	32 K
CAQUETÁ	490 K	20 K	30	18 K	76	0	0	74	274	57 K	9.889	94 K
CASANARE	369 K	2 K	0	41 K	8	0	0	39	0	9 K	7.253	52 K
CAUCA	1 MM	35 K	37	202 K	101	2 K	4 K	357	5 K	99 K	150.301	344 K
CESAR	1 MM	8 K	0	17 K	12	0	0	44	36 K	20 K	10.936	80 K
CHOCÓ	510 K	55 K	30	273 K	145	4 K	15 K	164	72	210 K	259.344	546 K
CÓRDOBA	2 MM	18 K	3	80 K	31	0	353	138	19 K	46 K	58.691	163 K
CUNDINAMARCA	3 MM	2 K	0	19 K	5	0	0	6	3 K	24 K	9.995	48 K
GUAINÍA	43 K	424	0	18 K	0	0	0	0	0	2 K	17.665	20 K
GUAVIARE	114 K	3 K	14	15 K	7	0	22	22	0	7 K	15.180	25 K
HUILA	1 MM	13 K	13	0	30	0	0	49	295	55 K	5.933	77 K

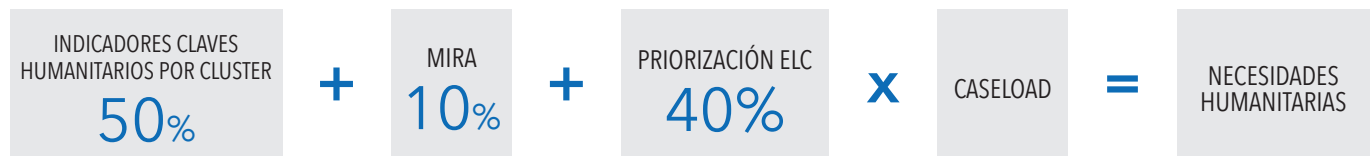
*niños (<18 años)

PRIORIDAD DE LAS

NECESIDADES

La construcción y la identificación de las necesidades territoriales y poblacionales para el HNO 2018 se basó en los siguientes componentes

1. Principales indicadores humanitarios por conglomerados (incluidos los indicadores de conflicto armado y de desastres naturales)
2. Personas con necesidades: número de personas con necesidades de asistencia humanitaria sobre la base de las tendencias 2015-2017.
3. Resultados de las evaluaciones de necesidades multisectoriales – MIRA: se incluye los clústers priorizados a través de las evaluaciones MIRA 2015-2017.
4. Priorización geográfica de los Equipos Locales de Coordinación (ELC): un ejercicio cualitativo por parte de los miembros de estos espacios de coordinación quienes analizaron las necesidades humanitarias para 2017. Los ELC también proporcionaron un escenario de necesidades en construcción de paz y soluciones duraderas. Los municipios fueron clasificados en prioridad alta, media o baja en un ejercicio conjunto en cada uno de los doce equipos locales en Colombia.



HNO 2018 resultados de priorización geográfica

De los 1.122 municipios²⁰ de Colombia, se priorizaron 234 municipios en 15 departamentos. 177 municipios fueron clasificados con prioridad alta y 57 media-alta. Los departamentos con mayor número de municipios priorizados son : Antioquia (35), Chocó (27), Cauca (25), Nariño (25), Tolima(19), Norte de Santander (17), Caquetá (13), Córdoba (12), Huila (12), Valle del Cauca (12), Meta (11), Putumayo (9), La Guajira (7), Arauca (6) y Guaviare (4). El año pasado, se priorizaron 194 municipios en 15 departamentos, bajo los mismos criterios.

Áreas más afectadas

La identificación de los territorios²¹ en categoría alta y media alta es el resultado de una metodología aplicada en años anteriores y que presentan tres movimientos esenciales. El primero, es la consolidación de un conjunto de indicadores sectoriales proporcionados por cada cluster humanitario²² (información cuantitativa) que permiten una visión conjunta de todos los cluster y también sectorial; un segundo paso es el complemento obtenido de los resultados de los ejercicios de cada ELC (información cualitativa) y de las evaluaciones de necesidades MIRA; un tercer y último momento, es la incorporación del número de casos humanitarios, compuesto tanto por indicadores de conflicto armado como por indicadores de desastres naturales para el período 2015-2017, el cual permite no solamente identificar las regiones con necesidades humanitarias, sino que permite identificar la magnitud del esfuerzo necesario de la respuesta. Por lo anterior el resultado del HNO es una visión multidimensional de las necesidades humanitarias e identifica de 15 de los 33 departamentos²³ analizados y a 234 municipios (20% de todos los municipios del país), con las mayores preocupaciones.

Los 234 municipios priorizados, ocupan el 41% de la extensión del país, y concentran el 35% de la población colombiana; adicionalmente, el 93% de los municipios son categoría²⁴ 4, 5 y 6, es decir que son municipios con una gran extensión, un bajo número de población y baja capacidad de ingresos. Desde un enfoque étnico, estos municipios concentran el 46% de la población indígena del país y un 56% de la población afrocolombiana; finalmente desde una perspectiva humanitaria, concentran del 77% de la población desplazada por expulsión, el 55% de la población que ha sufrido desastres naturales, el 96% de las víctimas de minas antipersona y un 72% de las víctimas registran delitos sexuales.

²⁰Se incluye información para los corregimientos departamentales.

²¹Municipios o corregimientos departamentales

²² Cada cluster definió un conjunto de indicadores a nivel municipal que permiten la identificación de los mayores rezagos a nivel territorial

²³ Es incluido en el análisis departamental y municipal a Bogotá.

²⁴ En Colombia se ha reconocido la existencia a 1.101 municipios, que se clasifican en categorías uno a seis y categoría especial de acuerdo a su número de habitantes y a sus Ingresos Corrientes de Libre Destinación.

PARTE II: DIAGNÓSTICO DE NECESIDADES POR SECTOR

BRECHAS DE INFORMACIÓN Y PLANIFICACIÓN DE LA EVALUACIÓN
RANKING DE PRIORIDADES - MUNICIPIOS

PRIORIZACIÓN SECTORIAL

Frontera con Venezuela

Región Sur

Región Noroccidental

Región Sur Oriente

Región Pacífico

BRECHAS DE INFORMACIÓN Y PLANIFICACIÓN DE LA EVALUACIÓN

EVALUACIONES MIRA (Periodo 2015 - 2017)

Entre enero de 2015 y septiembre de 2017 se han desarrollado 87 misiones y evaluaciones MIRA en la mayoría de departamentos con presencia de Equipos Locales de Coordinación como: Antioquia, Arauca, Caquetá, Cauca, Chocó, Córdoba, Guaviare, La Guajira, Meta, Nariño, Norte de Santander, Putumayo, Valle del Cauca y Vaupés.

Los sectores más priorizados por la recurrencia de afectación en las evaluaciones del MIRA han sido: Seguridad alimentaria y nutrición, agua, saneamiento e higiene, salud y protección. Igualmente, en algunos departamentos no priorizados se realizaron evaluaciones de necesidades a profundidad por parte de algunos sectores, dada la coyuntura del contexto (ej. Protección, educación en emergencia, entre otros)

Del total de las evaluaciones MIRA realizadas 63 corresponden a situaciones crónicas y 24 a emergencias súbitas, de éstas 57 responden a emergencias relacionadas al conflicto armados y 20 están relacionadas a desastres de origen natural. Así mismo, se identificaron tres misiones con doble afectación y tres enfocadas en la evaluación de afectación de la frontera con Venezuela.

Aproximadamente 50 socios humanitarios de Naciones Unidas, ONG internacionales y nacionales pertenecientes al Equipo Humanitario País, además de miembros de gobiernos locales han participado en la realización de las evaluaciones MIRA.

NÚMERO DE EVALUACIONES

28

NÚMERO DE SOCIOS

14

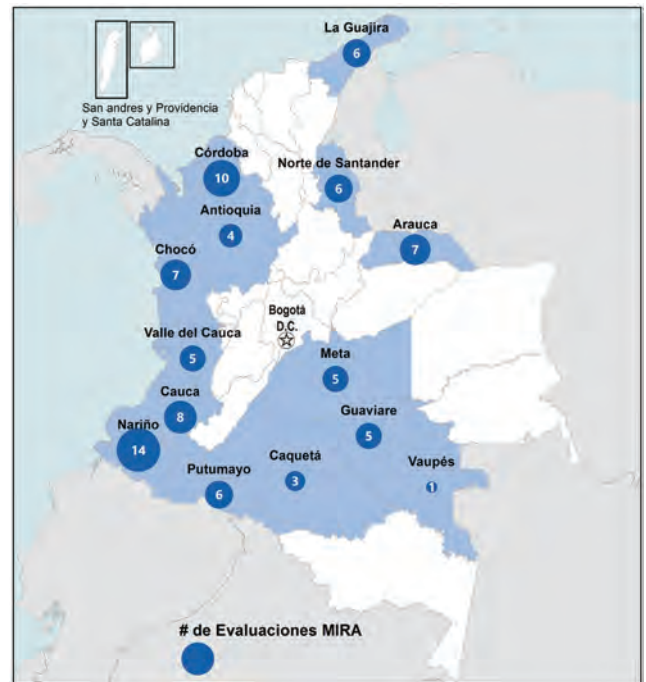
SECTORES PRIORIZADOS



BRECHAS DE INFORMACION

La adopción de una política de datos abiertos por parte del gobierno nacional ha permitido un mayor y mejor acceso a una gran cantidad de datos; no obstante, todavía existen debilidades en la calidad de la información y especialmente en el acceso a los microdatos de las entidades. Este último punto es de vital importancia, dado que permiten la desagregación de la información, especialmente con el fin de obtener más detalle por grupos de edades y por sexo. Ahora bien, el país sigue presentando falta de información frente a temas como saneamiento básico, inseguridad alimentaria y la nutrición a nivel municipal. Otros temas destacados donde se identifica un subregistro es el reclutamiento forzado de niños y adolescentes, las tasas de morbilidad según tipo de enfermedades, afectación y sedes educativas en riesgo por desastres naturales, los enfrentamientos armados, entre otros. Es importante resaltar la ausencia de información frente a la asistencia y a la respuesta humanitaria prestada por las autoridades municipales y departamentales, lo cual permitiría el direccionamiento e identificación de vacíos, para responder oportunamente a las necesidades identificadas.

EVALUACIONES MIRA (2015 - 2017)



Unos de los principales obstáculos en la información es la escasa oportunidad de desagregarla para las zonas rurales del país, quienes son afectados por problemáticas como conflicto armado, niveles altos de incidencia de pobreza y una presencia institucional muy débil del Estado. Estos vacíos limitan la capacidad de enriquecer el análisis y la identificación de necesidades diferenciadas entre las zonas urbanas y rurales del país (a diferencia de las zonas urbanas).

Otro limitante en las zonas rurales es la falta de obtención de información de manera frecuente, que imposibilita la construcción de análisis continuos o actualizados de los fenómenos. Estos se evidencian en la definición (para la mayoría de los cluster) de los datos sectorizados, y la cobertura. Dada la escasa información a nivel municipal, se tiene que recurrir a la información departamental.

El proceso de HNO identificó una serie de datos clave sectoriales que mejorarían significativamente la medición de las necesidades humanitarias en el país, si se reunieran, tales como:

- Los datos sobre refugios de emergencia disponibles o planeados son inexistentes. El Grupo de Refugiados no proporcionó datos este año por este motivo.
- Datos sobre la ubicación de los puestos de salud y equipos de emergencia. Estos centros de salud de “nivel 1” son pequeños, pero a menudo constituyen la primera línea de respuesta en situaciones de emergencia debido a desastres naturales o desplazamientos masivos.
- Los datos sobre las infecciones diarreicas y respiratorias son muy limitados, especialmente en las zonas rurales aisladas.
- Datos sobre los niveles de malnutrición aguda en las zonas rurales remotas, especialmente para las comunidades indígenas.

- Los datos sobre las diferentes formas de violencia de género, especialmente la violencia sexual, son de difícil acceso.
- Datos precisos sobre la deserción y la falta de asistencia a las escuelas, así como indicadores de reclutamiento de niños. Los únicos datos fiables sobre el reclutamiento forzoso suelen obtenerse después de que los niños son recuperados de grupos armados no estatales, ya que los incluidos en el RUV presentan subregistro.
- En general, los datos desglosados por sexo, edad y grupo étnico son de difícil acceso para los diferentes indicadores humanitarios.

Otros conjuntos de datos en los que falta información son:

- Información disponible sobre la respuesta y asistencia a desplazados internos por parte de las autoridades municipales y departamentales, que son típicamente la primera línea de asistencia a los desplazados internos.
- Vacíos de los datos sobre los desplazamientos intra-urbano e intra-rural en muchas áreas. Se requieren mejores estimaciones de la notificación de las PDI.
- Datos sobre acceso humanitario, restricciones de movilidad y poblaciones confinadas. Si bien el año 2013 marcó el primer año en que se recolectaron sistemáticamente los datos de confinamiento, hay muchas regiones que presentan subregistros o carecen de información sobre estas poblaciones debido a la alta dependencia de los actores internacionales para suministrar los datos que no es recogida sistemáticamente por ninguna fuente oficial. También se carece de datos sistemáticos sobre las limitaciones del acceso humanitario.
- Datos sobre necesidades humanitarias desagregados por sexo, edad y grupo étnico.
- Datos sobre poblaciones en riesgo / vulnerables al conflicto y violencia armada en particular en áreas urbanas.

RANKING DE PRIORIDADES POR MUNICIPIO

DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	CATEGORÍA	PRIORIDAD	PUNTAJE	RANKING
Tolima	Rovira	Alto	1	4,97	1
Chocó	Bajo Baudó	Alto	1	4,96	2
Chocó	Alto Baudó	Alto	1	4,96	3
Chocó	Medio Baudó	Alto	1	4,96	4
Cauca	Timbiquí	Alto	1	4,96	6
Nariño	Santa Bárbara	Alto	1	4,96	7
Nariño	San Andres de Tumaco	Alto	1	4,96	8
Nariño	Barbacoas	Alto	1	4,96	9
Chocó	Medio San Juan	Alto	1	4,96	10
Chocó	El Litoral del San Juan	Alto	1	4,96	11
Cauca	Guapi	Alto	1	4,96	12
Córdoba	Puerto Libertador	Alto	1	4,96	13
Chocó	Quibdó	Alto	1	4,96	14
Chocó	Riosucio(2)	Alto	1	4,96	15
Norte de Santander	Hacarí	Alto	1	4,96	16
Norte de Santander	El Tarra	Alto	1	4,96	17
Norte de Santander	San Calixto	Alto	1	4,96	18
Tolima	Chaparral	Alto	1	4,96	19
Norte de Santander	Teorama	Alto	1	4,96	20
Nariño	Samaniego	Alto	1	4,96	21
Caquetá	San Vicente del Caguán	Alto	1	4,96	22
Cauca	López	Alto	1	4,96	23
Caquetá	Cartagena del Chairá	Alto	1	4,96	24
Norte de Santander	La Playa	Alto	1	4,96	25
Tolima	Ibagué	Alto	1	4,96	26
Cauca	El Tambo	Alto	1	4,96	27
Nariño	Olaya Herrera	Alto	1	4,96	28
Valle del Cauca	Buenaventura	Alto	1	4,96	29
Norte de Santander	El Carmen	Alto	1	4,96	30
Cauca	Argelia	Alto	1	4,95	31
Putumayo	Puerto Guzmán	Alto	1	4,95	32
Antioquia	Nechí	Alto	1	4,95	33
Chocó	Bahía Solano	Alto	1	4,95	34
Norte de Santander	Tibú	Alto	1	4,95	35
Norte de Santander	Sardinata	Alto	1	4,95	36
Putumayo	Puerto Asís	Alto	1	4,95	37
Guaviare	San José del Guaviare	Alto	1	4,95	38
Nariño	El Charco	Alto	1	4,95	39
Chocó	Nuquí	Alto	1	4,95	40
Antioquia	El Bagre	Alto	1	4,95	41
Antioquia	Tarazá	Alto	1	4,95	42
Antioquia	Turbo	Alto	1	4,95	43
Antioquia	Ituango	Alto	1	4,95	44
Putumayo	Leguízamo	Alto	1	4,95	45

DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	CATEGORÍA	PRIORIDAD	PUNTAJE	RANKING
La Guajira	Riohacha	Alto	1	4,95	46
Córdoba	Tierralta	Alto	1	4,94	47
Tolima	Planadas	Alto	1	4,94	48
Antioquia	Briceño	Alto	1	4,94	49
Arauca	Tame	Alto	1	4,94	50
Putumayo	Valle del Guamuez	Alto	1	4,94	51
Cauca	Suárez	Alto	1	4,94	52
Antioquia	Cáceres	Alto	1	4,94	53
Norte de Santander	Ocaña	Alto	1	4,94	54
Cauca	Morales	Alto	1	4,94	55
Norte de Santander	Convención	Alto	1	4,94	56
Caquetá	Puerto Rico	Alto	1	4,94	57
Antioquia	Caucasia	Alto	1	4,94	58
Arauca	Arauquita	Alto	1	4,94	59
Antioquia	Zaragoza	Alto	1	4,94	60
Nariño	Policarpa	Alto	1	4,93	61
Antioquia	Segovia	Alto	1	4,93	62
Arauca	Arauca	Alto	1	4,93	63
Nariño	Francisco Pizarro	Alto	1	4,93	64
Córdoba	Montería	Alto	1	4,93	65
Norte de Santander	Cúcuta	Alto	1	4,93	66
Arauca	Saravena	Alto	1	4,92	67
Putumayo	Mocoa	Alto	1	4,92	68
Chocó	San José del Palmar	Alto	1	4,91	69
Antioquia	Valdivia	Alto	1	4,91	70
Huila	Algeciras	Alto	1	4,91	71
Putumayo	San Miguel	Alto	1	4,91	72
Norte de Santander	Abrego	Alto	1	4,90	73
Nariño	La Tola	Alto	1	4,90	74
Cauca	Patía	Alto	1	4,90	75
Tolima	Coyaima	Alto	1	4,90	76
Cauca	Popayán	Alto	1	4,90	77
Tolima	Ataco	Alto	1	4,90	78
La Guajira	Maicao	Alto	1	4,89	79
Putumayo	Orito	Alto	1	4,89	80
Tolima	Rioblanco	Alto	1	4,89	81
Guaviare	Calamar	Alto	1	4,89	82
Valle del Cauca	Cali	Alto	1	4,89	83
Caquetá	Milán	Alto	1	4,88	84
Cauca	Corinto	Alto	1	4,88	85
Nariño	Cumbitara	Alto	1	4,88	86
Nariño	Roberto Payán	Alto	1	4,88	87
Tolima	San Antonio	Alto	1	4,88	88
Arauca	Fortul	Alto	1	4,87	89
Cauca	Piamonte	Alto	1	4,87	90

DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	CATEGORÍA	PRIORIDAD	PUNTAJE	RANKING
Córdoba	Ayapel	Alto	1	4,87	91
Nariño	Magüi	Alto	1	4,87	92
Antioquia	Bello	Alto	1	4,86	93
Antioquia	Chigorodó	Alto	1	4,86	94
Tolima	Santa Isabel	Alto	1	4,86	95
Caquetá	Solano	Alto	1	4,86	96
Norte de Santander	Villa del Rosario	Alto	1	4,84	97
Cauca	Caloto(1)(3)	Alto	1	4,84	98
Antioquia	Remedios	Alto	1	4,84	99
Valle del Cauca	Dagua	Alto	1	4,83	100
Chocó	Tadó	Alto	1	4,83	101
Antioquia	Apartadó	Alto	1	4,83	102
Chocó	Lloró	Alto	1	4,82	103
Antioquia	Medellín	Alto	1	4,82	104
Chocó	Istmina	Alto	1	4,81	105
Córdoba	Montelíbano(1)(3)	Alto	1	4,81	106
Chocó	Sipí	Alto	1	4,81	107
Valle del Cauca	Bolívar	Alto	1	4,81	108
Chocó	Juradó	Alto	1	4,80	109
Nariño	Mosquera	Alto	1	4,79	110
Meta	Puerto Concordia	Alto	1	4,78	111
Meta	Puerto Gaitán	Alto	1	4,78	112
Chocó	Unguía	Alto	1	4,78	113
Guaviare	Miraflores	Alto	1	4,77	114
Chocó	Medio Atrato	Alto	1	4,77	115
Antioquia	Puerto Berrío	Alto	1	4,76	116
Huila	Baraya	Alto	1	4,76	117
Caquetá	La Montañita	Alto	1	4,76	118
Putumayo	Puerto Caicedo	Alto	1	4,75	119
Chocó	Nóvita	Alto	1	4,75	120
Meta	Puerto Rico	Alto	1	4,75	121
Nariño	Taminango	Alto	1	4,74	122
Cauca	Mercaderes	Alto	1	4,74	123
Caquetá	San José del Fragua	Alto	1	4,74	124
Chocó	Río Iro	Alto	1	4,72	125
Caquetá	Florencia	Alto	1	4,71	126
Antioquia	Anorí	Alto	1	4,71	127
Nariño	El Rosario	Alto	1	4,71	128
Cauca	Buenos Aires	Alto	1	4,70	129
Cauca	Bolívar	Alto	1	4,70	130
Caquetá	El Paujil	Alto	1	4,69	131
La Guajira	Dibulla	Alto	1	4,69	132
Nariño	Ricaurte	Alto	1	4,69	133
Antioquia	Carepa	Alto	1	4,68	134
Valle del Cauca	El Dovio	Alto	1	4,68	135

DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	CATEGORÍA	PRIORIDAD	PUNTAJE	RANKING
Huila	Tarqui	Alto	1	4,68	136
Cauca	Balboa	Alto	1	4,68	137
Nariño	Pasto	Alto	1	4,66	138
Tolima	Líbano	Alto	1	4,65	139
Tolima	Roncesvalles	Alto	1	4,65	140
Antioquia	San Andrés de Cuerquía	Alto	1	4,63	14
Cauca	Santander de Quilichao	Alto	1	4,62	141
Huila	Neiva	Alto	1	4,61	142
Norte de Santander	Puerto Santander	Alto	1	4,61	143
Meta	Villavicencio	Alto	1	4,61	144
Huila	Iquira	Alto	1	4,60	145
Chocó	Condoto	Alto	1	4,60	146
Tolima	Anzoátegui	Alto	1	4,60	147
Córdoba	San Pelayo	Alto	1	4,59	148
Antioquia	Urrao	Alto	1	4,59	149
Valle del Cauca	Florida	Alto	1	4,54	150
Nariño	La Llanada	Alto	1	4,54	151
La Guajira	Uribia	Alto	1	4,53	152
Caquetá	El Doncello	Alto	1	4,53	153
Antioquia	Yarumal	Alto	1	4,52	154
Tolima	Dolores	Alto	1	4,52	155
Meta	Mesetas	Alto	1	4,51	156
Meta	Vistahermosa	Alto	1	4,51	157
Caquetá	Curillo	Alto	1	4,51	158
Córdoba	San José de Uré(1)	Alto	1	4,49	159
Valle del Cauca	Jamundí	Alto	1	4,47	160
Chocó	Carmen del Darien	Alto	1	4,47	161
Chocó	Bagadó	Alto	1	4,43	162
Huila	Pitalito	Alto	1	4,42	163
Nariño	Leiva	Alto	1	4,41	164
Huila	Colombia	Alto	1	4,41	165
Nariño	Santacruz	Alto	1	4,40	166
La Guajira	Manaure	Alto	1	4,39	167
Cauca	Miranda	Alto	1	4,39	168
Córdoba	Valencia	Alto	1	4,39	169
Meta	La Macarena	Alto	1	4,39	170
La Guajira	Fonseca	Alto	1	4,38	171
Valle del Cauca	Palmira	Alto	1	4,37	172
Chocó	Atrato	Alto	1	4,33	173
Nariño	Mallama	Alto	1	4,29	174
Antioquia	Dabeiba	Alto	1	4,29	175
Putumayo	Villagarzón	Alto	1	4,28	176
Chocó	Acandí	Alto	1	4,27	177
Antioquia	Angostura	Medio Alto	1	4,25	178

DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	CATEGORÍA	PRIORIDAD	PUNTAJE	RANKING
Cauca	Florencia	Medio Alto	1	4,24	179
Córdoba	Lorica	Medio Alto	1	4,23	180
Meta	Uribe	Medio Alto	1	4,23	181
Tolima	Cajamarca	Medio Alto	1	4,20	182
Valle del Cauca	Tuluá	Medio Alto	1	4,14	183
Tolima	Villahermosa	Medio Alto	1	4,12	184
Córdoba	La Apartada	Medio Alto	1	4,12	185
Tolima	Natagaima	Medio Alto	1	4,12	186
Meta	Mapiripán	Medio Alto	1	4,12	187
Cauca	La Sierra	Medio Alto	1	4,07	188
Tolima	Villarrica	Medio Alto	1	4,04	189
Antioquia	Sabanalarga	Medio Alto	1	4,00	190
Antioquia	Buriticá	Medio Alto	1	4,00	191
Caquetá	Solita	Medio Alto	1	3,99	192
Córdoba	Buenavista	Medio Alto	1	3,95	193
Antioquia	Vegachí	Medio Alto	1	3,90	194
Tolima	Alpujarra	Medio Alto	1	3,87	195
Cauca	Toribio	Medio Alto	1	3,85	196
Chocó	Río Quito	Medio Alto	1	3,85	197
Huila	Acevedo	Medio Alto	1	3,83	198
Chocó	El Cantón del San Pablo	Medio Alto	1	3,83	199
Córdoba	San Bernardo del Viento	Medio Alto	1	3,81	200
Huila	La Argentina	Medio Alto	1	3,80	201
Antioquia	Amalfi	Medio Alto	1	3,80	202
Nariño	La Cruz	Medio Alto	1	3,73	203
Meta	Puerto López	Medio Alto	1	3,72	204
Norte de Santander	El Zulia	Medio Alto	1	3,71	205
Antioquia	Mutatá	Medio Alto	1	3,70	206
Cauca	Cajibío	Medio Alto	1	3,69	207
Huila	Tello	Medio Alto	1	3,68	208
Norte de Santander	Bucasica	Medio Alto	1	3,68	209
Guaviare	El Retorno	Medio Alto	1	3,67	210
Antioquia	Yondó	Medio Alto	1	3,67	211
Valle del Cauca	Pradera	Medio Alto	1	3,65	212
Antioquia	Toledo	Medio Alto	1	3,65	213
Tolima	Prado	Medio Alto	1	3,65	214
Chocó	Bojaya	Medio Alto	1	3,63	215
Nariño	Linares	Medio Alto	1	3,61	216
Arauca	Puerto Rondón	Medio Alto	1	3,60	217
Cauca	Almaguer	Medio Alto	1	3,57	218
Norte de Santander	Los Patios	Medio Alto	1	3,55	219
Cauca	Sucre	Medio Alto	1	3,53	220

DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	CATEGORÍA	PRIORIDAD	PUNTAJE	RANKING
Huila	San Agustín	Medio Alto	1	3,50	221
Antioquia	Itagui	Medio Alto	1	3,49	22
Caquetá	Belén de Los Andaquies	Medio Alto	1	3,49	223
Nariño	Ipiales	Medio Alto	1	3,47	224
Nariño	El Tambo	Medio Alto	1	3,45	225
Antioquia	Murindó	Medio Alto	1	3,39	226
Cauca	La Vega	Medio Alto	1	3,34	227
Huila	Suaza	Medio Alto	1	3,32	228
Valle del Cauca	Riofrío	Medio Alto	1	3,30	229
Antioquia	Vigía del Fuerte	Medio Alto	1	3,29	230
Valle del Cauca	Trujillo	Medio Alto	1	3,28	231
Antioquia	San Pedro de Uraba	Medio Alto	1	3,26	232
Meta	Puerto Lleras	Medio Alto	1	3,25	233
La Guajira	San Juan del Cesar	Medio Alto	1	3,20	234

PRIORIZACIÓN SECTORIAL

FRONTERA VENEZOLANA



Protección:

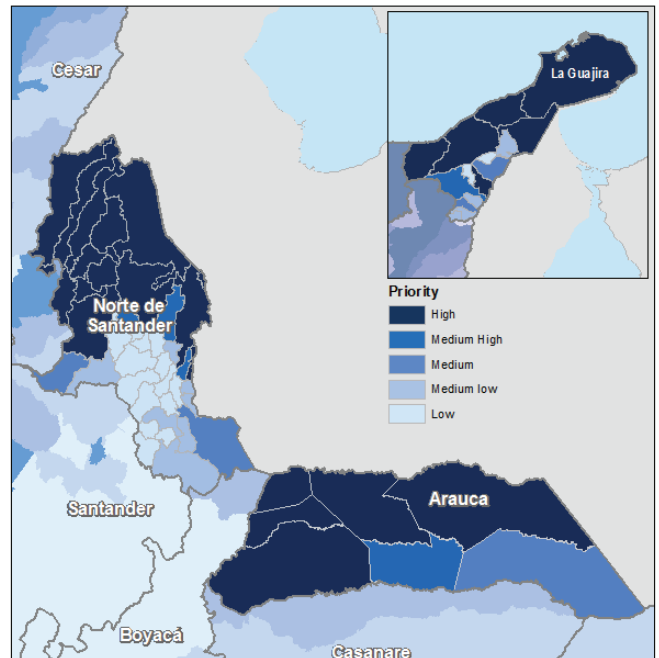
La situación política y socioeconómica en Venezuela ha estimulado el ingreso de personas provenientes de este país a Colombia, muchos de los cuales tienen necesidad de protección internacional. Si bien algunos lo hacen de manera transitoria (hacia países como Ecuador y Perú), muchos otros ingresan con vocación de permanencia y sin garantías socioeconómicas, generando un impacto en la vida y economía local. Muchas personas están sin acceso a derechos y servicios básicos, por la falta de documentación y desconocimiento de rutas de atención, además de ser víctimas de xenofobia. Preocupa la situación muy precaria de mujeres provenientes del vecino país que se desempeñan como trabajadoras sexuales por supervivencia en las zonas fronterizas. Así mismo, se evidencian importantes cambios en las dinámicas del conflicto y violencia generalizada, expresados en el fortalecimiento del accionar de grupos armados con presencia histórica en el territorio (ELN y EPL) y grupos posdesmovilización, intensificándose la disputa por el control territorial, social y de las economías ilícitas. Persisten hechos victimizantes como desplazamientos masivos, reclutamiento y utilización de NNAJ, violencia sexual, secuestros, amenazas, accidentes con MAP/MSE/AEI que generan restricciones a la movilidad e incluso de confinamiento de las poblaciones en áreas rurales y urbanas de las zonas fronterizas. Los grupos poblacionales más vulnerables son los indígenas (Hitnū, Yukpa y Wayuu), afrocolombianos, población desplazada y víctima del conflicto particularmente mujeres y NNAJ y personas llegando de Venezuela con necesidades humanitarias. La explotación de minerales y recursos naturales genera conflictos asociados a extorsiones, además de afectaciones asociadas al medio ambiente por acciones como la voladura de oleoductos por parte de los grupos armados.



Seguridad Alimentaria y Nutrición:

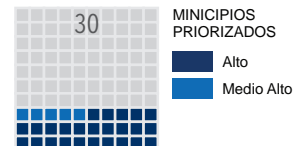
Zonas como La Guajira han tenido un impacto en este sector debido a la sequía prolongada. El incremento de migrantes de origen venezolano que pasan por las trochas sin ningún control o seguimiento, dificultan el acceso a la disponibilidad de alimentos. Las comunidades en su mayoría no cuentan con cultivos de pan coger, tienen malas prácticas de alimentación y disminución en sus ingresos debido a la afectación que viven por el conflicto, mientras se agravan las condiciones de vulnerabilidad y pobreza de las comunidades receptoras. Adicionalmente se ha generado un alto riesgo de desnutrición en niños y niñas en edad escolar y mujeres gestantes y lactantes, especialmente en comunidades indígenas como la Wayuu y la Yukpa.

FRONTERA VENEZOLANA: Norte de Santander, Arauca y La Guajira



NÚMERO TOTAL DE MUNICIPIOS PRIORIZADOS

30



Salud:

La presencia de grupos armados y la movilización transfronteriza, han tenido un gran impacto en el sector salud. Es importante destacar las necesidades de mujeres víctimas de violencia y explotación sexual, las mujeres gestantes y lactantes sin acceso a controles prenatales y otros servicios de este derecho fundamental. Hay vacíos en la prestación del servicio a la población que llega de Venezuela (incluidos los colombianos retornados) a las ciudades, particularmente por falta de documentación o por el desconocimiento de derechos. Las capacidades de las instituciones de salud en la región son muy reducidas dados los problemas de personal y situaciones administrativas; en ciudades capitales como Cúcuta están desbordadas las capacidades ante la fuerte demanda de los migrantes, además de los riesgos importantes para la salud pública.

Agua, Saneamiento e Higiene:

El acceso a agua, saneamiento básico e higiene es limitado por las múltiples afectaciones tanto en la temporada de lluvias (inundaciones) como de sequías, además del conflicto armado. El impacto de las actividades mineras y ataques contra la infraestructura petrolera impiden a las comunidades de la zona contar con agua segura y generan afectación en salud especialmente en niños y niñas. Estas mismas dinámicas afectan el agua en las escuelas, estimulando la deserción escolar. La población Wayuu en especial mujeres gestantes, lactantes, niños y niñas también sufren por la escasez del líquido, teniendo repercusiones en la nutrición y salud, causando en muchas ocasiones la muerte.

Educación en emergencias:

Muchos niños y niñas colombianos y ahora venezolanos han visto impedido el acceso a la educación, tanto por desconocimiento de sus derechos como por barreras administrativas de las instituciones educativas y el escenario de riesgo a causa del conflicto. Se evidencian casos de deserción escolar por la continuidad de acciones armadas, reclutamiento y utilización de menores y presencia de MAP/MSE/AEI en los entornos escolares de la región fronteriza. La pérdida de motivación en los estudiantes por el interés de la población en cultivo de coca, se debe a las situaciones de pobreza y necesidad de trabajar para garantizar su sustento, al aumento en el embarazo adolescente e infantil y falta de docentes por procesos administrativos. Así mismo, la infraestructura escolar es deficiente y no cumple con estándares de enfoque diferencial de género, tampoco se cuenta con aulas seguras para garantizar la calidad académica en zonas de alto impacto por el conflicto armado; a esto se suman dificultades en el transporte y alimentación escolar.

Albergues:

La multifectación por desastres, conflicto e ingreso de persona venezolanas ha generado la proliferación de asentamientos informales, especialmente en los departamentos de Norte de Santander y Arauca. Esta población se encuentra en condiciones de vulnerabilidad habitando en las calles, no cuentan con condiciones de vivienda digna ni acceso a servicios básicos. Así mismo, se genera un gran temor en las comunidades receptoras por la poca o nula preparación en caso de una nueva movilización masiva de migrantes de origen venezolano, especialmente en términos de albergue y otras necesidades sectoriales.

Recuperación Temprana:

En la región, el impacto socio económico del ingreso de personas venezolanas en un contexto ya vulnerable y precario, se ha sentido fuertemente. Muchos se ofrecen a trabajar con un salario menor que el que reciben los colombianos, lo que está generando niveles de xenofobia por la competencia en el mercado laboral. La falta de medios de vida hace que muchas mujeres venezolanas se encuentren en situación de prostitución y se vean inmersas en redes de explotación sexual en Colombia. Este escenario, sumado al impacto de desastres y afectaciones por el conflicto armado como desplazamientos y confinamientos, afectan la generación de ingresos y el acceso a medios de vida estable, especialmente a comunidades indígenas de zonas rurales apartadas. Existen muchas barreras para la comercialización de productos de origen artesanal y poca oferta local que responda a las necesidades e intereses diferenciales en función del sexo y pertenencia étnica, así como altas tasas de informalidad.

PRIORIZACIÓN POR DEPARTAMENTO: FRONTERA VENEZOLANA

DEPARTAMENTO	PRIORIDAD 1	PRIORIDAD 2	PRIORIDAD 3	PRIORIDAD 4	PRIORIDAD 5	PRIORIDAD 6	PRIORIDAD 7
Arauca	Protección	Educación en Emergencias	Seguridad alimentaria y nutrición	Salud	Albergues	Recuperación Temprana	Agua, Saneamiento e Higiene
Norte de Santander	Protección	Seguridad alimentaria y nutrición	Recuperación Temprana	Salud	Educación en Emergencias	Agua, Saneamiento e Higiene	Albergues
La Guajira	Seguridad alimentaria y nutrición	Protección	Educación en Emergencias	Salud	Agua, Saneamiento e Higiene	Albergues	Recuperación Temprana

PERSONAS CON NECESIDADES (2015-2017)

DEPTO	Población proyección de población	Personas desplazadas por expulsión (estimados)	Víctimas de MAP/MUSE	Afectados por desastres naturales	Delitos contra la libertad e integridad sexual	Personas con limitaciones de acceso, movilidad y confinamiento	Desplazamiento masivo	Ataques contra la población civil	Población Venezolana con vocación de Permanencia	Host Communities	Población con Necesidades	Doble afectación
Arauca	267.992	7.130	26	61.571	20	-	148	218	3.386	15.875	88.225	61541
La Guajira	1.012.926	4.503	-	17.230	44	-	-	83	46.509	10.838	79.208	14388
Norte de Santander	1.379.533	35.135	27	31.868	46	-	6.010	211	84.129	129.588	281.004	21524

REGIÓN SUR: PUTUMAYO Y NARIÑO

REGIÓN SUR: Putumayo, Nariño

Protección

La ubicación geoestratégica por cercanía al Pacífico y tener frontera con Ecuador, hacen propicia a esta región para múltiples dinámicas de afectación y violaciones a los derechos humanos e infracciones al DIH. La reorganización y copamiento de diferentes grupos armados (ELN, posdesmovilización, desertores FARC EP y otros) en zonas de donde salió las FARC EP y con presencia de cultivos ilícitos, permite la continuidad y aumento de desplazamientos y restricciones a la movilidad y acceso. Los homicidios y amenazas contra líderes y lideresas y defensores y defensoras, violencia sexual, reclutamiento y utilización de NNAJ, son parte de la violencia generalizada agudizados por vacíos en la respuesta institucional a las necesidades identificadas. Las comunidades indígenas (resguardos) en riesgo de extinción y afrocolombianas (consejos comunitarios), con énfasis en mujeres, NNAJ son los más vulnerables y afectados el conflicto armado, además por habitar en lugares con doble afectación por presencia de MAP/MSE/AEI e impacto por desastres naturales. Se destacan conflictos por el tránsito de migrantes que requieren de asistencia, orientación y protección ante los vacíos de atención.



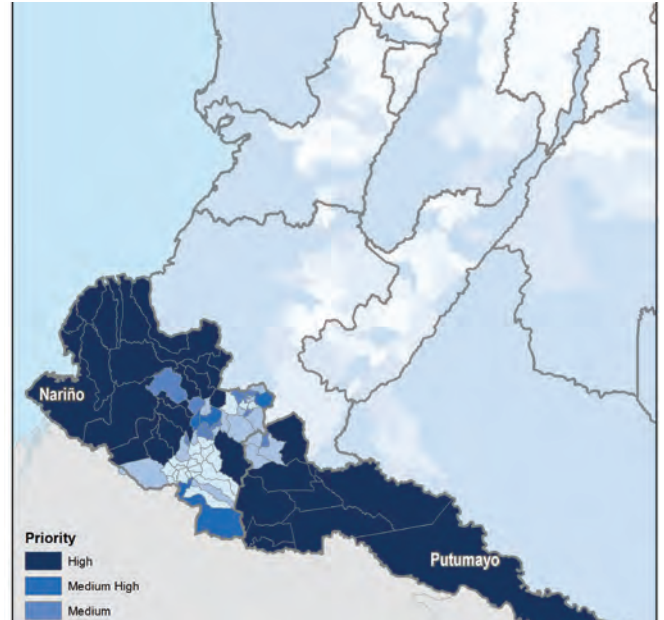
Seguridad Alimentaria y Nutrición

La región no cuenta con programas de seguridad alimentaria y se reporta riesgos de desnutrición, especialmente en niños y niñas en edad escolar, afectando el rendimiento académico. Las restricciones a la movilidad afectan la actividad agrícola para el sustento, además de la pérdida de vocación por dedicarse a los cultivos ilícitos poniendo en riesgo la seguridad alimentaria. El impacto de los desastres naturales y contaminación con MAP/MSE/AEI dificultan aún más el acceso a alimentos en cuanto a calidad, cantidad y permanencia, principalmente en la niñez y juventud.



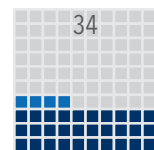
Agua, Saneamiento e Higiene:

La población afrocolombiana e indígena que habita en esta región, no cuenta con agua segura por los vacíos en sistemas de abastecimiento, potabilización y falta de infraestructuras adecuadas. La actividad de minería ilegal, petrolera y de cultivos ilícitos, causan contaminación en las fuentes de agua, además de los ataques a oleoductos. De otro lado, la presencia de diferentes grupos armados y contaminación con MAP/MUSE, generan restricciones a la movilidad en



NÚMERO TOTAL DE MUNICIPIOS PRIORIZADOS

34



MINICIPIOS PRIORIZADOS
Alto
Medio Alto

las comunidades que viven en lugares apartados, limitando el acceso a agua segura. Estas debilidades inciden en afectaciones asociadas a otros sectores como salud y educación.



Salud

La falta de infraestructura adecuada (urbana y rural) sumada a la escasez de personal médico, especialmente por temas administrativos, impiden un acceso adecuado los servicios de salud. Las comunidades que necesitan esta atención deben desplazarse a cabeceras municipales representando una dificultad por las distancias y los costos que ello conlleva. Se reportan muchas afectaciones en salud por la contaminación del agua y temas de saneamiento e higiene. Los inadecuados servicios y atención para la salud reproductiva en zonas rurales, representan un riesgo en mujeres gestantes y lactantes; tampoco se cuenta con acceso seguro a atención médica por víctimas de violencia sexual.

Educación

La violencia y presencia de los grupos armados no estatales y otros grupos organizados, contribuye a la deserción escolar de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes. Los internados, que funcionan como medida de protección ante amenazas, reclutamiento y vinculación de menores no cuentan con los recursos suficientes para la prestación del servicio. Otros factores como la falta de adecuada alimentación escolar, vacíos en la calidad de la educación, poca presencia de docentes y dificultades de acceso por la geografía del terreno, configuran un escenario con limitaciones para acceder a éste derecho fundamental.















Recuperación Temprana

Existen vacíos en la oferta de programas y proyectos de generación de ingresos y fuentes de empleo con enfoque diferencial de género, etario y étnico. Hay alta informalidad en el desarrollo e iniciativas de actividades económicas a largo plazo. Las necesidades causadas por emergencias (conflicto o desastres) y por problemas estructurales no cuentan con planes que puedan garantizar la recuperación y sostenibilidad de los medios de vidas en las comunidades afectadas.

Albergues

La principal preocupación en la región radica en el rompimiento del tejido social y familiar una vez ocurre una afectación; las comunidades se ven forzadas a desplazarse y ubicarse en los albergues que existen. Las actuales condiciones generan riesgos de protección especialmente para mujeres y niñas y dificultades para la atención de población con necesidades especiales, por no tener enfoques diferenciales.

PRIORIZACIÓN POR DEPARTAMENTO: REGIÓN SUR

DEPARTAMENTO	PRIORIDAD 1	PRIORIDAD 2	PRIORIDAD 3	PRIORIDAD 4	PRIORIDAD 5	PRIORIDAD 6	PRIORIDAD 7
Nariño	 Seguridad alimentaria y nutrición	 Protección	 Agua, Saneamiento e Higiene	 Salud	 Recuperación Temprana	 Educación en Emergencias	 Albergues
Putumayo	 Protección	 Agua, Saneamiento e Higiene	 Seguridad alimentaria y nutrición	 Recuperación Temprana	 Salud	 Educación en Emergencias	 Albergues

PERSONAS CON NECESIDADES (2015-2017)

DEPTO	Población proyecciónes de población	Personas desplazadas por expulsión (estimados)	Víctimas de MAP/MUSE	Afectados por desastres naturales	Delitos contra la libertad e integridad sexual	Personas con limitaciones de acceso, movilidad y confinamiento	Desplazamiento masivo	Ataques contra la población civil	Población Venezolana con vocación de Permanencia	Host Communities	Población con Necesidades	Doble afectación
Nariño	1.787.545	38.352	19	48.700	131	-	3.869	130	242	141.073	228.646	24519
Putumayo	354.094	12.544	17	113.370	59	-	210	99	-	32.558	158.648	99830

ZONA NOROCCIDENTE: ANTIOQUIA Y CÓRDOBA

Zona Noroccidente: Antioquia y Córdoba

Protección

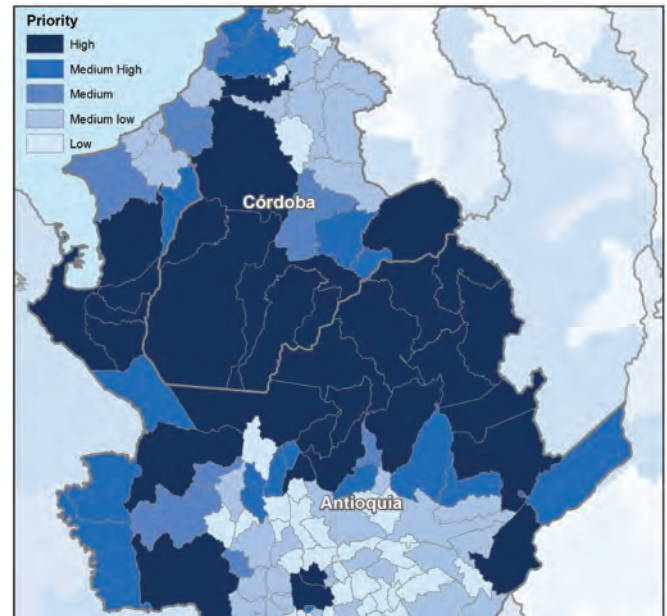
Los grupos armados posdesmovilización (AGC) y ELN en la región del Bajo Cauca (Antioquia) se expandieron a los lugares que dejaron las FARC EP, controlando el corredor estratégico para el desarrollo de economías ilegales (minería ilegal, cultivos ilícitos y narcotráfico). Se presenta una dinámica de extorsión, desplazamientos, restricciones a la movilidad y acceso como parte del control social e intimidación. En este marco, se perciben vacíos de protección especialmente para la población desplazada, dado los homicidios y amenazas contra líderes y lideresas sociales, y defensores de Derechos Humanos (entornos rurales y urbanos). Las mujeres de comunidades étnicas y campesinas presentan riesgos de explotación y VSBG; los NNAJ están expuestos al reclutamiento y vinculación en las economías ilícitas por la falta de oportunidades, en particular de la población adolescente y joven en zonas rurales, la múltiple afectación generada por desastres naturales recurrente, daño ambiental y contaminación la actividad minera; además hay vacíos en la ruta de atención para as personas venezolanas que han llegado a estos territorios y que agudizan las necesidades básicas insatisfechas y humanitarias existentes. en las comunidades receptoras y asentamientos urbanos en ciudades como Medellín y Montería.

Seguridad Alimentaria y Nutrición

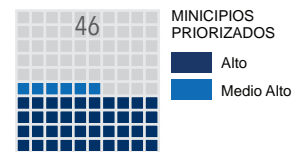
Existe inseguridad alimentaria por las limitaciones en la movilidad, debido a la presencia de MAP/MSE/AEI y control social; se afectan las labores agrícolas y de sustento diario, afectando especialmente a menores de cinco años de las comunidades indígenas Embera se identifica problemáticas nutricionales por las malas prácticas de alimentación asociadas a desastres naturales, la contaminación del río por mercurio (minería ilegal) y daños en el suelo. Se resalta la falta de acceso a la tierra para la producción y comercialización que garantice el sustento de la población.

Agua, Saneamiento e Higiene:

Las comunidades de la región presentan dificultades para el acceso al agua segura. Especialmente en las zonas rurales, no se cuenta con sistemas adecuados para el almacenamiento, distribución y potabilización. Las condiciones geográficas del territorio, las afectaciones en temporadas de sequía o lluvia, las dinámicas del conflicto armado y la economía extractiva



NÚMERO TOTAL DE MUNICIPIOS PRIORIZADOS



46

(minería) dificultan el acceso al líquido. Esta situación afecta el consumo de agua y preparación de alimentos en escuelas, causando enfermedades de origen hídrico principalmente en niños y niñas.

Recuperación Temprana

La presencia de actores armados ilegales supone retos para la consolidación de alternativas legales de vida, ya que estos grupos obligan a diversas poblaciones a mantener su participación en economías ilícitas. En este sentido, la situación humanitaria actual supone una restricción para la consolidación de economías alternativas que provean medios de vida dignos y legales.

Educación

El sector educativo se ve especialmente afectado por la presencia de grupos armados no estatales y otros grupos organizados. La situación socioeconómica de las comunidades de la región y el trabajo en economías ilícitas (minería y

cultivos ilícitos) estimulan la vinculación de los menores a estos grupos, al igual que el embarazo en adolescentes mujeres por el involucramiento sentimental con los miembros de los grupos armados. Vacíos estructurales por la baja presencia e inversión social, NBI y debilidades de la contratación de docentes explican la deserción escolar en la región.

especializados e infraestructura en áreas rurales, que limitan el acceso a éste servicio y derecho fundamental. Incidentes contra la misión médica y amenazas contra profesionales de salud en Antioquia, ponen en riesgo a los profesionales de ésta área.

Salud

Se debe resaltar la necesidad de atención psicosocial a la población desplazada y población vulnerable en zonas donde hay presencia de actores armados y donde históricamente se han identificado múltiples afectaciones en el marco del conflicto armado. Así como en otras regiones, se evidencian afectaciones en salud por enfermedades asociadas al consumo de agua y alimentación adecuada, ausencia de profesionales

Albergues

La respuesta en la región frente a los albergues continúa siendo muy débil. No se cuenta con la infraestructura adecuada dada la recurrencia de emergencias y afectaciones por desastres naturales, evidenciando debilidades presupuestales y de capacidades en los planes de contingencia para la respuesta.

PRIORIZACIÓN POR DEPARTAMENTO: ANTIOQUIA Y CÓRDOBA

DEPARTAMENTO	PRIORIDAD 1	PRIORIDAD 2	PRIORIDAD 3	PRIORIDAD 4	PRIORIDAD 5	PRIORIDAD 6	PRIORIDAD 7
Antioquia	Protección	Seguridad alimentaria y nutrición	Agua, Saneamiento e Higiene	Recuperación Temprana	Salud	Educación en Emergencias	Albergues
Córdoba	Seguridad alimentaria y nutrición	Agua, Saneamiento e Higiene	Protección	Recuperación Temprana	Educación en Emergencias	Salud	Albergues

PERSONAS EN NECESIDAD (2015-2017)

DEPTO	Poblacion proyeccion es de poblacion	Personas desplazadas por expulsión (estimados)	Víctimas de MAP/MUSE	Afectados por desastres naturales	Delitos contra la libertad e integridad sexual	Personas con limitaciones de acceso, movilidad y confinamiento	Desplazamiento masivo	Ataques contra la población civil	Poblacion Venezolana con vocación de Permanenci	Host Comunitaries	Población con Necesidades	Doble afectación
Antioquia	6.613.118	71.042	52	110.219	135	-	3.713	293	46.142	319.912	547.796	92947
Córdoba	1.762.530	17.601	3	80.185	31	-	353	138	16.113	46.066	160.138	58691

REGIÓN SURORIENTE

Protección

La presencia de grupos disidentes de las FARC y la disputa de territorios por los grupos armados, están generando desplazamientos, aumento de reclutamientos incluso en jóvenes indígenas, explotación y violencia sexual basada en género, amenazas a líderes y lideresas políticos de derechos humanos y otras afectaciones relacionadas a presencia de MAP/MSE/AEI, entre otros. Lo anterior se suma a la poca presencia institucional y la falta de capacidad de respuesta integral a las comunidades afectadas. Jóvenes y adolescentes en zonas periurbanas representan un grupo en alta vulnerabilidad debido a riesgos asociados la vinculación a grupos armados y economías ilícitas. Así mismo, los grupos indígenas han sido afectados desproporcionalmente por el conflicto, la pobreza y las tensiones interétnicas por temas de tierras.

Recuperación Temprana

Muchas víctimas del conflicto no han superado las condiciones de vulnerabilidad. Además hay zonas donde no hay acceso por la presencia de actores armados dificultando la respuesta e implementación que garanticen la recuperación de medios y condiciones de vida, especialmente comunidades indígenas (Jiw, Sikuani y Embera). Es necesaria la articulación entre el nivel local y nacional para buscar una respuesta por parte de la institucionalidad.

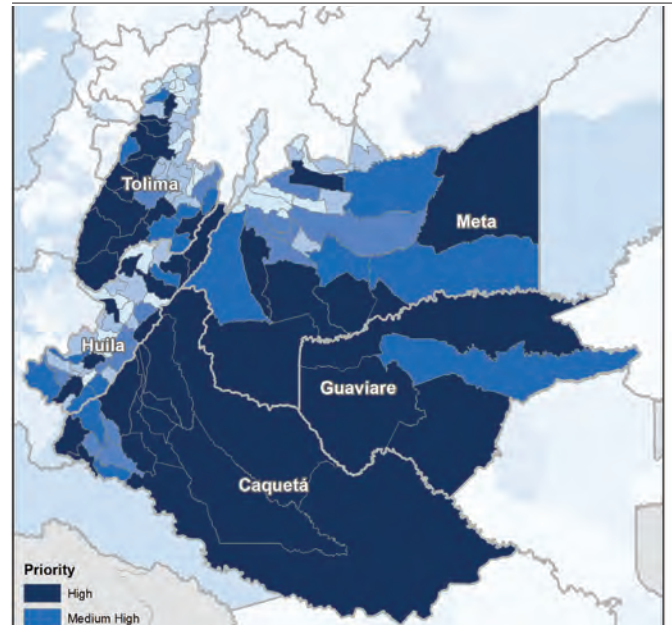
Seguridad Alimentaria y Nutrición

En la región se reportan altas tasas de desnutrición, en parte por fenómenos climáticos y desastres naturales que afectan los ciclos de cultivo y por las dificultades en el acceso al agua segura y de consumo (en términos de falta de infraestructura y contaminación). En las comunidades indígenas, los NNA son quienes están más expuestos a la inseguridad alimentaria. No se cuenta con programas exitosos de sustitución de cultivos ilícitos que incentiven el regreso a los cultivos de pancoger y generación de ingresos alternativos.

Salud

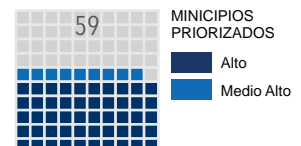
A pesar de que la región ha sido afectada históricamente por el conflicto armado, no cuenta servicios especializados como apoyo sicosocial, ni con la infraestructura o el personal permanente adecuado, especialmente en zonas rurales. Además, dificultades de acceso por los desastres naturales,

REGIÓN SURORIENTE: Meta, Guaviare, Caquetá, Tolima y Huila



NÚMERO TOTAL DE MUNICIPIOS PRIORIZADOS

59



costos de transporte tanto fluviales, terrestres y aéreos, imposibilitan a la población rural recibir asistencia médica óptima y oportuna. Las mujeres y adolescentes no cuentan con una oferta sólida de prevención y atención a problemas relacionados con salud sexual y reproductiva.

Educación en emergencias

La región se caracteriza por una fuerte afectación por presencia de minas antipersonal y municiones sin explotar. Por ello se hace necesario adelantar una priorización de la región en educación para el riesgo de minas, especialmente en las zonas rurales y con un enfoque especialmente étnico para mitigar las dificultades de acceso a la educación. Adicionalmente no hay oferta suficiente de etnoeducación para las comunidades indígenas.















 **Agua, Saneamiento e Higiene:**

El agua segura para consumo, así como elementos de saneamiento básico e higiene se han visto afectados por las dinámicas del conflicto y las actividades extractivas (minero-energéticas). La contaminación de las fuentes fluviales afecta la salud y bienestar especialmente de las poblaciones indígenas, comunidades desplazadas por conflicto y afectadas por desastres de origen natural, que se reubican en zonas de alto riesgo y no han podido recibir una respuesta adecuada a sus necesidades.

 **Albergues**

La respuesta en la región frente a los albergues continúa siendo débil. No se cuenta con la infraestructura adecuada y es necesario evaluar la respuesta en los planes de contingencia.

PRIORIZACIÓN POR DEPARTAMENTO: REGIÓN SUR ORIENTE

DEPARTAMENTO	PRIORIDAD 1	PRIORIDAD 2	PRIORIDAD 3	PRIORIDAD 4	PRIORIDAD 5	PRIORIDAD 6	PRIORIDAD 7
Meta, Guaviare	 Protección	 Recuperación Temprana	 Salud	 Seguridad alimentaria y nutrición	 Educación en Emergencias	 Agua, Saneamiento e Higiene	 Albergues
Caquetá	 Recuperación Temprana	 Protección	 Seguridad alimentaria y nutrición	 Educación en Emergencias	 Salud	 Agua, Saneamiento e Higiene	 Albergues

PERSONAS CON NECESIDADES (2015-2017)

DEPTO	Población proyección de población	Personas desplazadas por expulsión (estimados)	Víctimas de MAP/MUSE	Afectados por desastres naturales	Delitos contra la libertad e integridad sexual	Personas con limitaciones de acceso, movilidad y confinamiento	Desplazamiento masivo	Ataques contra la población civil	Población Venezolana con vocación de Permanencia	Host Communities	Población con Necesidades	Doble afectación
Caquetá	490.056	19.610	30	17.604	76	-	-	74	237	56.676	94.307	9889
Guaviare	114.207	2.969	14	15.350	7	-	22	22	-	6.545	24.907	15180
Huila	1.182.944	12.943	13	9.367	30	-	-	49	256	54.678	77.336	5933
Meta	998.162	9.412	29	33.474	28	-	247	57	3.366	36.473	82.839	26085
Tolima	1.416.124	21.077	12	17.592	50	-	-	75	13.624	65.228	117.658	11.388

REGIÓN PACÍFICO

Protección

La región pacífico tiene múltiples afectaciones debido a su ubicación geoestratégica, por la salida al mar y zonas de difícil acceso. Allí se reporta presencia de ELN, grupos armados posdemobilización, desertores FARC EP, al igual que la reconfiguración y expansión de nuevos grupos que han cooptado los espacios dejados por las FARC EP. Esta región se caracteriza por emergencias recurrentes, especialmente desplazamientos masivos, restricciones de la movilidad y confinamientos causados por MAP/MSE/AEI; las amenazas a líderes y lideresas sociales y deferes y defensoras de derechos humanos se agravan por la situación de respuesta humanitaria estatal oportuna, especialmente en las zonas rurales. La dinámica de emergencias recurrentes ha sido un obstáculo para la realización de intervenciones integrales a largo plazo. Las comunidades más afectadas son principalmente afrocolombianas e indígenas; son víctimas del conflicto y muchas de ellas revictimizadas actualmente por la violencia generalizada urbana, caracterizada por amenazas y VSBG afectando principalmente mujeres y niñas, quienes se ven doblemente afectadas al no contar con servicios y rutas de atención inmediata.

Recuperación Temprana

Limitaciones en la respuesta y poca articulación de procesos territoriales e institucionales. Son necesarias intervenciones en zonas donde ha habido emergencias humanitarias y han transitado a procesos de retornos o de estabilización. Las intervenciones deben manejar un enfoque diferencial de género y etnia, así como asegurar acceso a mercados, sostenibilidad, oferta y presencia Estatal.

Seguridad Alimentaria y Nutrición

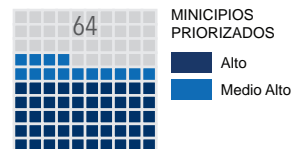
Los situaciones de seguridad y riesgos se dan por el accionar de los grupos armados, asociadas a restricciones y desplazamientos que dificultan el acceso a los medios de vida, especialmente para las comunidades indígenas y afrodescendientes que viven en el pacífico colombiano. Hay impacto en la seguridad alimentaria de las comunidades en zonas rurales para quienes no cuentan con cultivos de pancoger, ni manera de mantener sus medios de sustento. La doble afectación que presentan dada las emergencias por los desastres causados por amenazas naturales, además de los hábitos alimenticios que culturalmente presentan algunas comunidades, no incluyen un balance que garantice una dieta adecuada.

REGIÓN PACÍFICO: Valle del Cauca, Cauca, Chocó



NÚMERO TOTAL DE MUNICIPIOS PRIORIZADOS

64



Salud

Las comunidades indígenas y afrocolombianas del pacífico reportan dificultades de acceso a la salud, en términos de distancia para la atención, ausencia de profesionales de la salud e insumos médicos, afectando principalmente a menores de cinco años y mujeres gestantes. A su vez, las enfermedades recurrentes como EDA e IRA se presentan por la relación entre la precaria calidad del agua y la baja respuesta en salud en temas de promoción y prevención. A esta situación se suma la precariedad de servicios en salud sexual y reproductiva y el impacto por emergencias de desastres naturales y actividad minera.

Educación

A raíz de las emergencias en el marco del conflicto y los desastres naturales, los niños, niñas, adolescentes y jóvenes presentan dificultades para la continuación de sus actividades escolares. La respuesta estatal ha sido incompleta y la cooperación ha tenido un papel fundamental en la complementariedad. Es necesario seguir fortaleciendo o creando más entornos protectores para evitar el uso, la vinculación y reclutamiento de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes y mitigar riesgos de afectación por MAP/MUSE en el trayecto hacia la escuela.

Agua, Saneamiento e Higiene:

La presencia de cultivos ilícitos y la actividad minera generan altos grados de contaminación del agua, lo que incrementa la posibilidad de contraer enfermedades. No se cuenta con una respuesta de autoridades locales o nacionales para garantizar el acceso a agua segura para las comunidades afectadas. No se cuenta con la infraestructura necesaria para el suministro o almacenamiento de agua segura especialmente en la zona rural.

Albergues

Los albergues que dispone esta región son limitados teniendo en cuenta la recurrencia de desplazamientos masivos. Las familias víctimas han tenido que albergarse en sitios que no cumplen con los requisitos que exige la norma, sin privacidad, seguridad ni enfoque diferencial de género y pertenencia étnica.

PRIORIZACIÓN POR DEPARTAMENTO: REGIÓN PACÍFICO

DEPARTAMENTO	PRIORIDAD 1	PRIORIDAD 2	PRIORIDAD 3	PRIORIDAD 4	PRIORIDAD 5	PRIORIDAD 6	PRIORIDAD 7
Cauca	Salud	Protección	Recuperación Temprana	Seguridad alimentaria y nutrición	Educación en Emergencias	Agua, Saneamiento e Higiene	Albergues
Chocó	Protección	Recuperación Temprana	Seguridad alimentaria y nutrición	Salud	Agua, Saneamiento e Higiene	Educación en Emergencias	Albergues
Valle del Cauca	Protección	Seguridad alimentaria y nutrición	Educación en Emergencias	Salud	Agua, Saneamiento e Higiene	Recuperación Temprana	Albergues

PERSONAS EN NECESIDADES (2015-2017)

DEPTO	Población proyección de población	Personas desplazadas por expulsión (estimados)	Víctimas de MAP/MUSE	Afectados por desastres naturales	Delitos contra la libertad e integridad sexual	Personas con limitaciones de acceso, movilidad y confinamiento	Desplazamiento masivo	Ataques contra la población civil	Población Venezolana con vocación de Permanencia	Host Communities	Población con Necesidades	Doble afectación
Cauca	1.404.205	35.183	37	202.422	101	1.921	3.912	357	4.224	98.669	342.914	150.301
Chocó	510.047	54.682	30	273.400	145	4.352	14.988	164	63	210.056	542.891	259.344
Valle del Cauca	4.708.262	71.721	3	43.803	163	885	835	440	14.300	338.501	469.816	34.757